

PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

PERSPECTIVA DE EMBAJADORES LATINOAMERICANOS EN LA OMC

Cancún y el futuro de las negociaciones de Doha

REDACCIÓN*

Debido a la importancia de la Ministerial de Cancún y los posibles impactos que podría traer para la región, el equipo de redacción de PUENTES sostuvo entrevistas con el Embajador del Uruguay ante la OMC, Carlos Pérez del Castillo, que es actual Presidente del Consejo General de la OMC, y con el Embajador de México ante el mismo órgano, Eduardo Pérez Motta, que representa al país anfitrión de la Conferencia Ministerial, para que aclararan a los lectores de PUENTES el papel que juega dicha reunión, los temas cruciales, y los principales retos y resultados que se esperan. Los comentarios proporcionados por los dos embajadores fueron utilizados como base para este artículo.

Después de varios de años de espera, tras la finalización de la Ronda de Uruguay y el fracaso por lanzar una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales en la Conferencia Ministerial de Seattle, los ministros de los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) llegaron a un acuerdo en la Cuarta Conferencia Ministerial de Doha en noviembre de 2001, para lanzar una nueva ronda de negociaciones que diera especial importancia a los intereses de los países en desarrollo e intentara reducir las asimetrías entre los países industrializados y aquellos en desarrollo. Dichas asime-

trías resultaron de las pasadas rondas comerciales, especialmente de la Ronda de Uruguay.

En este contexto, los ministros acordaron establecer un plan de trabajo ambicioso que incluiría negociaciones y discusiones en trece temas centrales de la OMC, además de temas horizontales referentes a aspectos de desarrollo que formarían parte integral de los otros temas establecidos. Dicho plan de trabajo fue concebido como la Agenda de Doha para el Desarrollo, que dio origen a la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de Doha que, según lo dictado por los ministros, deberá concluir en diciembre de 2004.

Origen de la noción de una "Ronda del Desarrollo"

Según el Embajador Pérez del Castillo, "las rondas anteriores habían dejado a los países en desarrollo una serie de asimetrías en los resultados. Adicionalmente, el proceso de liberalización de comercio había favorecido más a sectores de interés de países industrializados que a sectores de interés de países en desarrollo, debido a que se negociaron convenios como los de propiedad intelectual, servicios, inversión, entre otros, que reducían el margen de maniobra de los países para aplicar políticas nacionales. En esta oportunidad se buscó contemplar más los intereses genuinos que

EN ESTA EDICION

- 2 Cancún en las negociaciones de Doha. **Redacción**
- 4 Con miras hacia Cancún.
- 6 Acceso a los Mercados, Dinámica de las Negociaciones, **Miguel Rodríguez Mendoza**
- 8 Agricultura y Comercio en la OMC, Preguntas para la OMC y los países. **Carlos Pomareda**
- 11 Bienes y servicios ambientales: Por una definición con visión latinoamericana. **Nicola Borregaard, Annie Dufey y Zulma Guzmán.**
- 15 Desarrollo sostenible y comercio, Hacer realidad el Párrafo 51. **Vicente Yu**
- 17 Apertura y participación en las negociaciones comerciales, Un futuro posible. **Víctor Hugo Rico y María Cecilia Wedemeyer.**
- 19 Solución de Diferencias, ¿Cuáles son los intereses de América Latina?. **Mateo Diego-Fernández.**
- 21 NOTICIAS REGIONALES
- 27 SOLUCION DE DIFERENCIAS
- 28 MEDIO AMBIENTE
- 31 EVENTOS Y PUBLICACIONES

CINPE
UNIVERSIDAD
NACIONAL

futuro
latinoamericano

ICTSD

EDITORIAL

Los ojos de muchas personas están puestos en la cita de Cancún, México, del 10 al 14 de setiembre, en la que los Ministros de Comercio de 146 países evaluarán los avances que se han dado en las negociaciones durante estos dos años, desde la Ministerial de Doha.

Una de las enseñanzas de Doha para los países en desarrollo es que, en la medida que hablen entre ellos y se pongan de acuerdo, aumentan las posibilidades de que los acuerdos reflejen sus intereses y no sólo el de los países desarrollados. Cuánto de eso sucederá en Cancún es algo que habrá que observar con cuidado.

Este número que presentamos tiene como tema central la Ministerial de Cancún, por la importancia que esta reunión tiene para América Latina y el Caribe, y los diversos procesos de negociación que se están dando en la región.

El acercar estos temas -que por lo general se circunscriben a grupos de especialistas- al gran público y diversos sectores de la sociedad, es un objetivo de PUENTES, con la profunda convicción de que a través de la información y el entendimiento se pueden generar procesos sociales constructivos, una mejor toma de decisiones y sobre todo un fortalecimiento de las frágiles democracias regionales.

Carlos Murillo
CINPE-UNA,
San José, Costa Rica

se dejaron de lado en las rondas precedentes e integrar los puntos de interés de países en desarrollo a las normas de la OMC y, en función de todos esos retrasos e incumplimientos y de esa poca prioridad que se le había dado a nuestros sectores fue que se decidió darle ese nombre".

Asimismo, subrayó que ese nombre no vale por sí solo, sino que debe tener sustancia y que la noción de desarrollo debe trascender el marco del trato especial y diferenciado, y de la implementación de temas anteriores. Insistió en que la noción de desarrollo tiene que estar presente en todos los temas de la negociación, como acceso a los mercados agrícolas y los no-agrícolas, servicios, propiedad intelectual, entre otros, y que se deben mirar desde un punto de vista más ofensivo del que se ha tenido hasta la fecha, que ha sido más bien defensivo.

En estos momentos, a casi dos años de que surgiera la Declaración de Doha, y a unos cuantos días de que inicie la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, en Cancún, México, se está en un punto clave dentro del proceso de negociaciones de la Ronda de Doha.

La Conferencia Ministerial ofrece la única oportunidad para que los ministros de comercio se reúnan y den la orientación política necesaria antes de la fecha límite establecida para la culminación de dicha Ronda. Por lo tanto, los resultados de esta Conferencia tendrán consecuencias importantes en el futuro del proceso de negociación de la Ronda de Doha, y consecuencias directas en las oportunidades de desarrollo de los países latinoamericanos, y en los esfuerzos de integración hemisférica bajo el marco de las negociaciones para formar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En esta única ocasión para que los ministros de los 146 países se reúnan, ¿Qué papel juega la Ministerial de Cancún en el proceso de negociaciones de la Ronda de Doha?

El Embajador Eduardo Pérez Motta señaló que la Declaración de Doha establece los objetivos y los asuntos que se tendrán que cumplir en Cancún. Estos asuntos se dividen en tres partes:

1. Los asuntos que se deben reportar a los ministros en Cancún, que incluyen los temas de comercio electrónico, pequeñas economías, y relación entre comercio, deuda y finanzas. Al respecto opinó que no espera que esta parte sea demasiado complicada;
2. El segundo grupo se refiere a las decisiones que se deben tomar en Cancún, que a su vez se divide en dos:
 - a. Decisiones que se debieron tomar durante el año pasado y parte de este año, que incluyen el paquete de desarrollo, acceso a medicamentos y los ADPIC, y los temas de implementación. Estos temas quedaron pendientes y deben ir a Cancún.
 - b. Decisiones para este año y que son de acceso, como es el caso de agricultura y los mercados no-agrícolas. Estos temas se debieron resolver en mayo, pero también siguen pendientes y tienen que estar en Cancún.
3. Decisiones que se deben tomar en Cancún como estaba establecido. Estos incluyen los temas de Singapur y el registro multilateral de vinos y bebidas espirituosas.

Al respecto, comentó que "el objetivo de México es que se llegue a decisiones sobre modalidades agrícolas, modalidades para mercados no agrícolas, registro, temas de Singapur y temas de desarrollo".

Por otra parte, el Embajador Pérez del Castillo mencionó que "al no ser ésta una etapa final de la ronda, habrá más flexibilidad para el progreso y dar orientaciones políticas, sin que esto signifique que se ha fracasado. Los esfuerzos se encaminan hacia una reunión en Cancún que, quizás no refleje las expectativas que tenían

nuestros ministros cuando acordaron los plazos en Doha -todos ellos incumplidos-; pero se espera que sea una reunión en donde se puedan tomar decisiones importantes en los temas claves, reiterar los compromisos políticos con los temas y calendarios y mantener la fecha final del 2004".

El proceso de Doha ha avanzado de forma mucho más lenta de la establecida por los ministros. Ninguna fecha fijada dentro de la Declaración Ministerial se ha cumplido, lo que trae como consecuencia que todos los temas de negociación lleguen a Cancún sin resolverse y se volverán a poner sobre la mesa. Esto podría traer efectos negativos sobre el resultado de la Ministerial de Cancún debido a que, cuando se llevan demasiados temas, se puede complicar y se tiene que hacer mucho trabajo técnico previo para llegar preparados. Según el Embajador Pérez Motta, ese es el reto que tenemos por delante.

Al respecto, el Embajador Pérez del Castillo afirmó que "se ha hecho todo lo posible por resolver muchas de estas cuestiones antes de Cancún". Explicó que en lo que se refiere al tema de trato especial y diferenciado, en el cual se recibieron 88 propuestas de los países en desarrollo, se trabaja para llegar con un paquete para Cancún. Explicó que estos son temas muy técnicos, por lo cual, los ministros no se podrán dedicar a ellos en el poco tiempo que se tiene en Cancún y, por lo tanto, es necesario llegar a la reunión con los temas resueltos.

En materia agrícola, afirmó que es el tema central de esta ronda y que los Estados Unidos y la Unión Europea presentarían un documento en conjunto, lo que fue recibido como un paso en buena dirección, un insumo a un proceso multilateral. Sin el entendimiento de estos dos países hubiera sido muy difícil, "el hecho que lleguen con un entendimiento es una condición necesaria para la negociación". Sin embargo, puntualizó que seguramente no sería el documento que se adoptaría en Cancún y que ahora era necesario que los demás países nutrieran ese texto y llegaran a una conclusión. El movi-

miento en el tema de agricultura en Cancún es absolutamente necesario, si se quiere mantener el nivel de ambición en las negociaciones y la fecha de conclusión establecida.

¿Pero cuáles serían las consecuencias si no se llegara a una decisión sobre las modalidades de agricultura?

El Embajador Pérez del Castillo afirmó que "si no hay movimientos en agricultura, la fecha de diciembre de 2004 estaría seriamente comprometida y la ronda podría extenderse muchos años". Adicionalmente comentó que "es posible que no lleguemos a Cancún con un acuerdo específico de todos los números de los tres pilares: de acceso a mercados, de subvenciones a las exportaciones y apoyo a lo interno de los países. No obstante, se debe tener un sentido de orientación muy claro y prever los parámetros de la negociación y una orientación política para seguir trabajando. Eso podría considerarse como algo que no tendría trascendencia sobre la fecha final de la ronda".

Una cosa es segura, un menor nivel de ambición en agricultura significará -sin lugar a dudas-, un menor nivel de ambición en otros temas.

Se debe recordar que aunque agricultura sea uno de los temas claves para los países en desarrollo, el hecho de que las negociaciones dentro de la OMC se rijan por el "todo único" (o *single-undertaking*, que obliga a los países a aceptar todas las decisiones tomadas en la Ronda como un paquete único), aumenta la importancia de que los países en desarrollo no sólo se concentren en los temas claves, sino que vean la negociación como una sola. De no hacerlo podrían terminar, como en las últimas rondas, pagando caro en otras áreas, por concesiones pequeñas en agricultura.

Según el Embajador Pérez del Castillo, las delegaciones de los países latinoamericanos tendrán que tener en mente las siguientes recomendaciones para poder lograr una conclusión exitosa de la Ronda de Doha:

1. Mantener el nivel de ambición de los mandatos de Doha y de ninguna

manera permitir que esos mandatos se diluyan;

2. Asegurar que la noción de desarrollo esté presente en cada uno de los temas y no contentarse con que dicha noción sean solamente mayores plazos para adecuarse a las normas;
3. Insistir en que haya equilibrio en el contexto global de las negociaciones y no sólo en un tema.

Los resultados de la Conferencia tendrán implicaciones directas en el proceso de negociación de la Ronda de Doha y, por lo tanto, determinarán en cierta forma el éxito o fracaso de dicha Ronda.

El Embajador Pérez Motta identifica tres posibles resultados de Cancún:

1. Que no se logren decisiones concretas y, por lo tanto, haya que reiniciar el proceso de nuevo y éste se complique debido a que la gente no estará en condiciones para volverse a sentar a la mesa de negociación.
2. Que se concluya que no se estaba en condiciones de llegar a decisiones y que se alarguen un poco las fechas; pero que los ministros den indicaciones para que se siga trabajando y en los próximos meses se llegue a acuerdos. En este caso, Cancún se convertiría en un *reality check*.
3. Que todo salga bien y se tomen decisiones claves, aunque sean generales, pero que permitan mantener el proceso en movimiento.

En pocos días, los ojos del mundo se centrarán en Cancún esperando que los Ministros puedan llegar a acuerdos y resolver los asuntos pendientes para darle el impulso necesario a las negociaciones, y que la Ronda de Doha se concluya con éxito en la fecha establecida.

** Artículo escrito por Eduardo Escobedo, editor de PUENTES en ICTSD, y basado en entrevistas realizadas a Eduardo Pérez Motta (Embajador de México ante la OMC) y a Carlos Pérez del Castillo (Embajador de Uruguay ante la OMC y Presidente del Consejo General de la OMC).*

Con miras hacia Cancún

La reunión de la Organización Mundial de Comercio en el balneario mexicano de Cancún, del 10 al 14 de setiembre, será escena de batallas agrícolas y la tarea principal para los ministros de los 145 países Miembros, consistirá en hacer un balance de los progresos realizados en las negociaciones y otros trabajos en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo.

En las nuevas conversaciones sobre el comercio internacional se intentará llegar a acuerdos en los temas de agricultura, servicios, bienes industriales y temas relacionados con propiedad intelectual; sin embargo, se pronostica que el tema principal será la disputa sobre la política agrícola entre negociadores de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, de acuerdo con expertos en agricultura y comercio.

Las conversaciones mundiales sobre el comercio agrícola están casi paralizadas luego de que los miembros de la OMC no lograron alcanzar un pacto el 31 de marzo, y por nuevas tensiones entre EE.UU. y la UE sobre los subsidios.

Los países de los llamados mercados emergentes, como México, sienten que sus industrias agrícolas están siendo devastadas por importaciones más baratas y fuertemente subsidiadas, que provienen de naciones ricas como EE.UU. y de la UE.

La preocupación aumentó el año pasado, cuando EE.UU. anunció un programa de US\$52.000 millones en ayuda agrícola que provee seis años de subsidios para sus productores. Los funcionarios estadounidenses han defendido en repetidas ocasiones el programa, diciendo que es acorde con los compromisos de comercio internacional de su país.

Los ministros de los 146 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se reúnen en Cancún, México, del 10 al 14 de septiembre, para tratar de llegar a acuerdos en los temas de agricultura, servicios, bienes industriales y temas relacionados con propiedad intelectual. Sin embargo, el centro de discusión será, como en otras ocasiones, la agricultura y los subsidios directos e indirectos a la exportación que rodean a las políticas agrícolas. Los dos jugadores claves en estas negociaciones son los Estados Unidos y la Unión Europea, que parecen estar en una etapa de conversaciones para superar las diferencias significativas de sus posiciones. Este diálogo, que generalmente reconforta a los demás miembros de la OMC, también hace temer que en la reunión, ambos se presenten con "un pacto cerrado", ya que para EE.UU., el éxito de la ministerial dependerá del compromiso de la UE en recortar sus subsidios agrícolas, y el bloque europeo afirma lo mismo de EE.UU.

Mientras EE.UU. y otros países en el llamado Grupo de Cairns -un frente de países exportadores agrícola-ganaderos-, quieren profundizar la eliminación de aranceles agrícolas y apoyos locales que distorsionan el comercio; la UE, Japón y otros favorecen menores eliminaciones a un ritmo más lento.

El principal argumento que llevará Washington a la conferencia ministe-

rial de la OMC es que sus subsidios son mucho menores que los de la UE. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., el apoyo del gobierno al sector agrícola nacional asciende a US\$19.100 millones, en comparación con el tope de us\$60.000 millones de la UE y los US\$30.000 millones de Japón".

Por otra parte, ministros de la UE declararon recientemente que las concesiones realizadas en junio fueron suficientes y que esperan acciones recíprocas de EE.UU.

Trato especial y diferenciado

Durante el más reciente intento para desbloquear las negociaciones, el Comité de Agricultura de la OMC reunido entre el 26 de junio y el primero de julio, procedió a la revisión del documento preliminar de modalidades presentado, bajo su propia responsabilidad, por el jefe de las negociaciones, Stuart Harbinson, el 18 de marzo pasado. Mientras EE.UU., Japón, Noruega y Suiza, rechazaron abiertamente el documento como base para las negociaciones, algunos países están de acuerdo en tomar este texto como un "punto de partida", dado que no hay más alternativas sobre la mesa.

En general, los países en desarrollo consideran que los lineamientos en cuanto a Trato Especial y Diferenciado que provee el documento, son un buen inicio para avanzar, aunque algunos consideran que la eliminación de aranceles propuesta para los países en desarrollo es demasiado ambiciosa. Los países exportadores de productos agrícolas del Grupo de Cairns, por su parte, consideran que el documento no va lo suficientemente lejos en cuanto a la reducción de subsidios y eliminación de aranceles, sin embargo consideran

que el documento es útil como base para futuras negociaciones. Tanto Harbinson como algunas fuentes de países en desarrollo, estaban a la espera de que el Comité de Negociaciones Comerciales aportara algunas luces al respecto en su reunión del 14 y 15 de julio.

Según el Acuerdo de Agricultura de la OMC las negociaciones con miras a futuras reformas, deben tener en cuenta, "asuntos no relacionados con el comercio y un régimen de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo".

El documento de Harbinson propone dos medidas específicas para fortalecer el régimen de Trato Especial y Diferenciado en las negociaciones: Primero, la creación de una categoría de "Productos Estratégicos" (PE) de especial importancia para la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la garantía de la subsistencia, la cual estará sujeta a cortes arancelarios mucho menores que los de otros productos agrícolas. Y segundo, un mecanismo especial de salvaguardia, que defienda a los agricultores de los países en desarrollo de súbitos aumentos en las importaciones.

Los países en desarrollo apoyan estas propuestas pero difieren en cuanto a su enfoque. Indonesia, India y China alegan que cada país debe ser autónomo para auto-designar cuáles son sus productos estratégicos, así como aquellos que califican para una medida de salvaguardia especial. Algunos países incluso proponen que los PE deben estar totalmente exentos de reducciones arancelarias y deben ser automáticamente elegibles para medidas de salvaguardia especiales, las cuales no obstante, cubrirían un rango más amplio de productos. Algunos países latinoamericanos miembros del Grupo de Cairns, así como algunos países industrializados, insisten en que se deben aclarar los criterios para aplicar a ambos mecanismos y temen que su uso indiscriminado pueda afectar el comercio Sur-Sur.

A EE.UU. no le "convencen" los Productos Estratégicos

EE.UU., por su parte, manifestó ante el Comité de Agricultura que no está "convencido" por los argumentos presentados para la categoría de Productos Estratégicos y sugirió que las preocupaciones de los países en desarrollo se canalicen a través del Mecanismo de Salvaguardias Especiales (SSM -por sus siglas en inglés). Voceros de ese país señalaron también que el Trato Especial y Diferenciado para países en desarrollo depende de la situación de cada país, posición que rechazan los países en desarrollo. Esta posición causó furia entre los países en desarrollo, en especial Filipinas, que manifestó que esta es la única alternativa que les queda a los países en desarrollo ante un ambiente regido por distorsiones comerciales.

En efecto, el pasado 18 de julio en una ronda de negociaciones formales del Comité de Agricultura de la OMC, una coalición de 16 países en desarrollo, encabezada por Filipinas, presentó una Declaración enfatizando la inviabilidad de un acuerdo de modalidades agrícolas, si no se incluyen como partes integrales del paquete de acceso a los mercados los conceptos de Productos Especiales y un nuevo mecanismo de salvaguardia.

La alianza, que incluye a Cuba, República Dominicana, Honduras, India, Indonesia, Kenia, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Turquía, Uganda, Venezuela y Zimbabue, argumenta en su declaración conjunta que los lineamientos agrícolas de la OMC favorecerán injustamente a los países ricos permitiéndoles distorsionar el comercio mundial con subsidios de billones de dólares, dejando por fuera de la competencia a los productores de los países en desarrollo, imponiendo de esta forma mayor presión sobre los mercados domésticos del sur. Además, dicen, los aranceles que eran el único instrumento que les quedaba a los países en desarrollo para proteger a sus agricultores,

están en riesgo en medio de un proceso de liberalización que califican de "desenfrenado".

Entretanto, los dos jugadores claves en las negociaciones agrícolas, EE.UU. y la UE, parecen estar en una etapa de conversaciones constructivas a fin de superar las diferencias significativas de sus posiciones. Este diálogo, que generalmente reconforta a los demás miembros de la OMC, también hace temer que en la reunión Ministerial de Cancún ambos se presenten con "un pacto cerrado".

** Artículo preparado por la redacción de PUENTES, con base en información de Bridges, y agencias IPS y Reuters.*

Los artículos que se incluyen a continuación plantean reflexiones, preocupaciones y propuestas interesantes para los países latinoamericanos, sobre temas claves para la Ministerial de Cancún. Por un lado, el tema de acceso a mercados se trata desde las propuestas de eliminación de aranceles y se habla de las preocupaciones sobre como éstas pueden resultar en compromisos excesivos de apertura a los mercados de los países en desarrollo. Por otro lado, en el tema agrícola, se plantea la importancia de lograr compromisos políticos nacionales previos, que permitan hacer reformas políticas a tiempo. Sobre el tema de bienes y servicios ambientales, las autoras ponen a discusión las definiciones existentes e introducen elementos importantes sobre la realidad latinoamericana que pueden reflejarse en una definición más amplia. Finalmente, en el artículo sobre la aplicación del párrafo 51 de la Declaración de Doha, se observan las falencias de las discusiones en los Comités de Comercio y Medio Ambiente y Comercio y Desarrollo, y se ofrece un camino de solución para fortalecer sus discusiones.

ACCESO A LOS MERCADOS

Dinámica de las Negociaciones

MIGUEL RODRÍGUEZ MENDOZA *

Aunque existe la percepción de que los aranceles han perdido importancia como instrumento de protección, nadie puso en duda, al definirse el Programa de Doha para el Desarrollo, que las negociaciones sobre el acceso a los mercados para los bienes industriales -léase la reducción o eliminación de aranceles y otras medidas restrictivas- sería uno de sus componentes fundamentales. Después de todo, es en esta área en la que se han centrado las negociaciones comerciales multilaterales por más de 50 años, desde los inicios del GATT a mediados del siglo pasado, ...y aún quedan numerosos asuntos pendientes, como la progresividad arancelaria, los elevados aranceles que los países industrializados mantienen en algunos sectores clave -como los textiles y el calzado-, y los niveles relativamente altos de protección arancelaria que existen en numerosos países en desarrollo.

Muchos desestimaron, sin embargo, en la etapa preparatoria de los acuerdos de Doha, el grado de complejidad que revestirían estas negociaciones. Tratándose del más tradicional de los temas de negociación, el camino a seguir parecía trazado de antemano. Nada más falso. A mitad del período entre el inicio y el final previsto de las negociaciones, la dinámica de los debates en curso ha puesto de manifiesto el enorme desafío que los países de la OMC enfrentan para definir los parámetros -las modalidades- capaces de inducir una mayor apertura de mercados mundiales en el sector de las manufacturas. Y es poco lo que la Conferencia Ministerial de Cancún podrá hacer para ayudar a los negocia-

No hay duda de que el principal objetivo de los países desarrollados es lograr una apertura significativa de los mercados de todos los países en desarrollo. Mientras Estados Unidos promueve la eliminación total de aranceles en todos los países, la UE y otros países industrializados plantean una combinación de rebajas de aranceles, la simplificación arancelaria y la eliminación sectorial de aranceles. Así, ahora las miradas se fijan en Cancún, pero más que solventar las diferencias intrínsecas a las propuestas sobre modalidades, en torno a las que oportunamente se logrará algún tipo de consenso, la Conferencia Ministerial de Cancún podría impulsar decisivamente las negociaciones sobre acceso a los mercados en la medida en que pueda resolver otros asuntos pendientes: modalidades para las negociaciones agrícolas, propuestas sobre tratamiento especial y diferenciado, divergencias en materia de indicaciones geográficas, y apertura de negociaciones sobre inversiones.

dores en Ginebra a superar las dificultades que estos enfrentan.

Las dificultades existentes son de tipo procesal, pero también -y fundamentalmente- de naturaleza sustantiva. Los países difieren en cuanto a los procedimientos para adelantar los trabajos sugeridos por la Presidencia del Grupo de Negociaciones -a cargo del Embajador Pierre-Louis Girard, de Suiza, un veterano en estas lides- y también en

relación con los resultados que deberían ser alcanzados. Estas diferencias no son ajenas a las que existen en otras áreas de las negociaciones de Doha, pero se expresan de manera particular en las discusiones sobre el acceso a los mercados para los bienes no agrícolas, debido a los intereses divergentes de numerosos participantes, trátase de países pequeños o grandes, pobres o ricos, desarrollados o en desarrollo, y a las posiciones encontradas que existen incluso al interior de los distintos grupos de países. En las negociaciones en curso han hecho crisis las alianzas tradicionales, especialmente entre países en desarrollo, a medida que comienzan a imponerse las realidades comerciales de los distintos protagonistas.

En cuanto a los procedimientos, las modalidades propuestas por la Presidencia combinan la aplicación de una fórmula para la reducción arancelaria, con la eliminación sectorial de aranceles y algunas medidas especiales en favor de países en desarrollo. La fórmula se basa en los promedios arancelarios de cada país y se aplicaría a cada línea arancelaria. En el supuesto de que el coeficiente utilizado (y aun no propuesto ni decidido) sea relativamente ambicioso, su aplicación conduciría a una drástica reducción de los aranceles más elevados (aquellos por encima del promedio arancelario de cada país) y de la progresividad arancelaria, que son planteamientos fundamentales de los países en desarrollo. Otro elemento importante de la fórmula propuesta es la utilización de los aranceles consolidados en la OMC, como base para las reducciones arancelarias acordadas, algo que también

ha sido propuesto insistentemente por los países en desarrollo.

Los sectores incluidos en la eliminación sectorial de aranceles, la cual obligaría a todos los países -excepto los países menos adelantados (PMAs)- son siete: textiles y vestido; calzado; productos derivados del cuero; pesca y productos de la pesca; piedras y metales preciosos; productos eléctricos y electrónicos; y, partes y componentes de automóviles. Y en cuanto a las medidas especiales en favor de los países en desarrollo, éstas incluyen plazos más amplios para la aplicación de los compromisos y la posibilidad de excluir de la consolidación de aranceles hasta un 5% de sus líneas arancelarias, siempre y cuando estas no excedan 5% de sus importaciones totales. También se contempla una exclusión de carácter general para los PMAs en este capítulo de las propuestas.

El mundo reacciona

Las reacciones a las proposiciones presentadas por la Presidencia del Grupo de Negociaciones han sido variadas. Estados Unidos, las considera poco ambiciosas y demasiado sesgadas a favor de los países en desarrollo, entre otras razones porque la fórmula utiliza los aranceles consolidados y no los aplicados. Japón piensa que las modalidades propuestas son demasiado inflexibles -sobre todo porque las reducciones se aplicarían a líneas arancelarias y no a los promedios arancelarios en su conjunto-.

Algunos países en desarrollo, incluidos numerosos países de América Latina se oponen a la eliminación sectorial de aranceles y otros, como los países africanos y la India, encuentran que las modalidades imponen compromisos excesivos de apertura de sus mercados a los países en desarrollo. Mauricio, por su parte, cuestiona el impacto que podría tener la aplicación de la fórmula propuesta en las preferencias comerciales de las que se benefician numerosos países en desarrollo.

Más allá del debate sobre las modalidades para las negociaciones, sin em-

bargo, las diferencias entre los países tienen que ver con los objetivos que estos persiguen en las negociaciones. No hay duda que para los países desarrollados su principal objetivo es lograr una apertura significativa de los mercados de todos los países en desarrollo -con excepción de los PMAs- aun cuando existen variaciones en cuanto a los niveles de apertura esperados y los mecanismos para alcanzarlos. Así, mientras que EE.UU. promueve la eliminación total de aranceles en todos los países -una propuesta de negociación sobre la que ahora parece insistir mucho menos-, la UE y otros países industrializados plantean una combinación de rebajas de aranceles, la simplificación arancelaria y la eliminación sectorial de aranceles. Otros países, como Japón y Corea comparten este objetivo general, pero matizan un tanto sus posiciones de negociación, tratando de preservar un cierto margen de flexibilidad para sus propias economías.

Es precisamente por coincidir en este objetivo general de apertura de los mercados de los países en desarrollo, que los países industrializados han cuestionado, casi unánimemente, la propuesta de la Presidencia de utilizar los aranceles consolidados en la OMC -y no los aranceles aplicados- como base para calcular los promedios arancelarios y efectuar las disminuciones que puedan convenirse. Dado que los aranceles consolidados por la mayoría de los países en desarrollo son superiores a los aranceles que aplican -por ejemplo, numerosos países de América Latina consolidaron su universo arancelario al 35%, mientras que el promedio de sus aranceles varía entre el 12 y el 15% -se teme que la fórmula propuesta por la Presidencia no tenga mayores efectos en la reducción de los aranceles aplicados.

La situación en el mundo en desarrollo es un tanto más compleja, pues allí coexisten posiciones de negociación que son tanto o más divergentes que las que puedan existir con respecto a los países desarrollados. Por una

parte, India y un número importante de países de Africa y Asia oponen fuerte resistencia a la apertura de sus mercados y exigen una aplicación rigurosa de los principios de tratamiento especial y no diferenciado en las negociaciones. Por otra parte, muchos países de América Latina y del Sudeste Asiático se inclinan por negociaciones que resulten en una ampliación efectiva del acceso a los mercados de todos los países, desarrollados y en desarrollo y no parecen dispuestos a que estos últimos se excluyan de los compromisos finales. En el fondo, estas divergencias reflejan la creciente importancia del comercio entre países en desarrollo. Después de todo, más de un tercio de las exportaciones de los países en desarrollo se dirigen a mercados de otros países en desarrollo, y este porcentaje tiende a crecer. Por ello, para este grupo de países resulta esencial que las negociaciones de Doha se traduzcan en mejores oportunidades comerciales, y estas incluyan, cada vez más, oportunidades en los mercados de otros países en desarrollo.

Aunque las miradas se fijan ahora en Cancún, no es seguro que las diferencias actuales sobre las modalidades de las negociaciones sean superadas en esta oportunidad. En verdad, más que solventar las diferencias intrínsecas a las propuestas sobre modalidades, en torno a las que oportunamente se logrará algún tipo de consenso, la Conferencia Ministerial de Cancún le podrá dar un impulso decisivo a las negociaciones sobre acceso a los mercados en la medida en que pueda resolver muchos otros asuntos pendientes -las modalidades para las negociaciones agrícolas, las propuestas sobre tratamiento especial y diferenciado, las divergencias en materia de indicaciones geográficas, la apertura de negociaciones sobre inversiones y, por supuesto, los asuntos pendientes relativos a la propiedad intelectual, el acceso a las medicinas y las crisis de salud pública, entre otros-.

** Miguel Rodríguez Mendoza ex-director general adjunto de la OMC.*

AGRICULTURA Y COMERCIO EN LA OMC

Preguntas para la OMC y los países

CARLOS POMAREDA *

Las tres ideas de fuerza con las que se puede alimentar una estrategia para el desarrollo de la agricultura en América Latina se resumen en la siguiente forma.

En primer lugar, lograr productos de creciente calidad y que renten mejor a nivel primario, incluyendo las hortalizas, las frutas, los productos naturales, las plantas medicinales, y todos aquellos que, a diferencia de los granos, pueden generar mayores ingresos para los pequeños productores. Desde luego que en aquellos países donde hay ventaja comparativa para la producción de granos, esta debe preservarse.

En segundo lugar, la creación de valor agregado en los productos de la agricultura, de modo que no solo se produzcan materias primas y que ellas se exporten a precios míseros, sino que los productos salgan de los predios, del medio rural y de los países con el valor agregado que da el proceso de transformación, la certificación de calidad y las marcas.

En tercer lugar, como una combinación de los dos factores antes referidos, estrategias locales y nacionales que aseguren que se fortalecen los vínculos entre la agricultura primaria, la agroindustria y los servicios; con el propósito de generar efectos multiplicadores, y así lograr empleo de calidad, como una de las formas más efectivas de contribuir a resolver la pobreza rural.

Seguir estos tres principios básicos requiere voluntad política en cada país y hacer reformas profundas

A pocos días de la Ronda Ministerial de la OMC en Cancún, resulta propicio un mensaje para quienes tienen que hacer la tarea en cada país y durante las negociaciones. La experiencia repetida en varias ocasiones por la Unión Europea y los Estados Unidos de ajustar sus medidas de política interna en vísperas de las negociaciones comerciales, son un claro ejemplo de lo que debían haber hecho los países de América Latina. Ya ese momento pasó, por lo menos en lo que concierne a la agenda para la reunión en Cancún; pero es importante que, anticipando los posibles recompromisos que se adquieran en tal escenario, se logre en forma previa un compromiso político nacional al más alto nivel para hacer las reformas de política que se requieren y que así los acuerdos comerciales no profundicen la crisis económica y la pobreza en América Latina.

en las reglas para el comercio internacional. Estando a sólo un mes de la Conferencia Ministerial de la OMC, resulta propicio un mensaje para quienes tienen que hacer la tarea en cada país y para las negociaciones en Cancún.

Políticas nacionales

Pretender ir a negociaciones multilaterales sobre comercio sin haber hecho en cada país la tarea previa de definir hacia donde conducir la agricultura, con fines de desarrollo, es la

madre de la precariedad con la que los países en desarrollo se presentan a las negociaciones comerciales. Especialmente en Latinoamérica, en los últimos años, la agenda de negociaciones comerciales ha absorbido lo que debería haber sido la agenda para el desarrollo de la agricultura.

Era necesario definir con claridad los planes nacionales de desarrollo para la agricultura, tomando en cuenta por lo menos los tres aspectos referidos en la sección anterior. A partir de ello tenían que haberse definido las medidas de política a nivel sectorial y aquellas que, tomadas en un nivel superior, son fundamentales para el desarrollo de la agricultura. En este terreno lo pertinente a las inversiones estratégicas del Estado para crear capacidades; para el desarrollo tecnológico y los mecanismos para la atracción de inversión privada, eran fundamentales.

La experiencia repetida en varias ocasiones por la Unión Europea y los Estados Unidos de ajustar sus medidas de política interna en vísperas de las negociaciones comerciales, son un claro ejemplo de lo que debían haber hecho los países de América Latina. Ya ese momento pasó, por lo menos en lo que concierne a la agenda para la próxima reunión en Cancún, pero es importante que anticipando los posibles recompromisos que se adquieran en tal escenario, se logre en forma previa un compromiso político nacional al más alto nivel para hacer las reformas de política que se requieren para que los acuerdos comerciales no

terminen por profundizar la crisis económica y la pobreza en América Latina.

En relación a esto, un trabajo reciente de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) muestra con claridad cómo, a pesar de las ilusiones sobre los beneficios que crearía la liberalización del comercio, en la práctica el crecimiento económico logrado no ha contribuido a superar las condiciones de desempleo, marginación y deterioro de la pobreza. Más aún el trabajo revela que, de continuar las tendencias, la situación en 10 años habrá llegado a puntos críticos de alto riesgo para la democracia. También vinculado a este tema, en una investigación realizada por Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial (SIDE), se muestra cómo en 20 países continentales e insulares en la Cuenca del Caribe, y especialmente en los de Centroamérica, en los últimos 10 años se ha profundizado el déficit de balanza comercial.

Lo ocurrido es el resultado de un desequilibrio entre ilusiones y fantasías sobre lo que se cree que se logra con la liberalización comercial y la incapacidad para definir y poner en práctica políticas para el desarrollo. Este desequilibrio se sustenta en gran medida porque se siguen tolerando reglas para el comercio internacional, definidas por los países desarrollados y que favorecen a sus productores y a las empresas transnacionales establecidas en dichos países.

Políticas de países desarrollados reflejadas en la OMC

Sostener la agricultura en la UE y en los EE.UU., obedece a consideraciones estratégicas, pero en el marco de realidades socioeconómicas diferentes. En el primer caso la diversidad de naciones, la incorporación de nuevos socios a la UE, la pequeña y

mediana propiedad, la valoración de lo rural con fines de favorecer el turismo, y otras particularidades, definen que su política de protección y los ajustes que hacen a través del tiempo se orienten a preservar una forma de vida en el medio rural. Desde luego que, además de ello, existen todas las medidas de apoyo que favorecen los excedentes exportables y la expansión de las corporaciones transnacionales en la industria de alimentos.

En el caso de los EE.UU., hay que diferenciar en primer lugar la agricultura con alto valor agregado en las regiones del este y del oeste, en donde con poca tierra, agua de riego, alta tecnología y mano de obra emigrante se producen rubros altamente rentables (hortalizas, frutas, vinos, carnes preparadas, etc). En relación a estos rubros y para proteger a quienes los producen, se mantienen altos aranceles a los productos de origen latinoamericano con valor agregado, que podrían competir con ellos. Por otro lado, en el medio oeste la producción comercial de granos a gran escala y bajos costos es apoyada con subsidios directos a las exportaciones, para favorecer la expansión en el mercado internacional, también en manos de grandes corporaciones. Más aún, las políticas de donaciones en los países cuya producción se ayudó a destruir sirven de punta de lanza para acrecentar la dependencia externa.

En síntesis, por razones diferentes los países más ricos siguen manteniendo protección a la agricultura y así crean evidentes beneficios para quienes ya disfrutaban de condiciones de vida muchísimo más elevadas que las que se puede encontrar en el campesinado y la pequeña empresa, que es la estructura dominante en América Latina.

Con legítimo derecho sobre la preocupación en cuanto a la salud de

las personas y la conservación del medio ambiente, los países desarrollados están insistiendo en aquellas medidas para mejorar la sanidad y la inocuidad de los productos de la agricultura de origen externo. Sin embargo, con este derecho se está pretendiendo crear reglas para el comercio internacional a través de medidas de política en el campo de la sanidad, la inocuidad, la certificación ambiental, y recientemente contra el bioterrorismo, las cuales imponen exigencias sustantivas en los países en desarrollo, especialmente haciendo más costosos los procesos productivos, las exportaciones y elevando los costos de transacción para las operaciones comerciales.

Por otro lado, los países desarrollados han mantenido sus programas de ayuda externa. Sin embargo, reconociéndose su utilidad, los montos aportados solo compensan en forma asistencialista, por el gran daño que se ejerce por la vía de la política de protección.

El compromiso de las partes

Es evidente que, como resultado de la creciente disparidad dentro de los países y entre países, las condiciones se han agravado y es cada vez más extendido el problema de la pobreza y la mendicidad. Es necesario, por lo tanto, una convergencia entre las políticas de todos los países para que, reconociendo la esencia de la globalización, se logren medidas para resolver juntos los problemas. Tales políticas deben de estar orientadas a movilizar recursos financieros para inversiones productivas en la agricultura y, en general, en el medio rural; y para mejorar la calidad de los recursos humanos.

Ello implica, por un lado, ofrecer incentivos en los países desarrollados para inversiones en los países en desarrollo, que permitan por ejem-

plo que el valor agregado se forje en dichos países. El caso del café es, solo para citar un ejemplo, el que mejor ilustra la urgencia de este cambio, pues permitiría que el café de calidad que se tome en Europa les aporte a los productores y a los países que lo producen algo más del 5% que ahora reciben por cada taza de café que se sirve en un restaurante europeo.

Del lado de los países en desarrollo y en particular los de América Latina, el traer esa inversión requiere una lucha en tres frentes. El primero es definir conglomerados agroindustriales en los que sea factible una alianza con la inversión externa. El segundo son las medidas de política pública de inversiones estratégicas, que creen condiciones para atraer inversión privada y que ejerza fuertes efectos multiplicadores. Y el tercero es atender con diligencia los temas pertinentes al capítulo sobre inversiones en la agenda multilateral en la OMC y en los tratados de libre comercio.

Cancún: un punto de inflexión

En forma preparatoria para la reunión de Cancún los países desarrollados han realizado reformas internas preliminares que revelan la voluntad de seguir apoyando su agricultura. Tal es el caso, por ejemplo, de las reformas anunciadas en junio por la UE para reorientar las Medidas de Ayuda Interna, dándole más atención a los temas de la calidad de vida y la conservación del medio ambiente en el medio rural. Ello im-

plicaría una posible reducción de hasta un 60% en aquellas medidas de subvención que distorsionan el comercio. Desde luego que aun está por verse la oferta que hará EE.UU. y como ambas partes avanzan hacia una fórmula en la que no solo están de por medio sus intereses sino las relaciones comerciales multilaterales.

Si realmente existe voluntad para cambiar el rumbo, entonces la reunión de Cancún ofrece una invaluable oportunidad para que se definan reglas para el comercio que realmente contribuyan a que este sea un instrumento para el desarrollo. De no lograrse tales medidas se habrá perdido una oportunidad más.

En esta ocasión se dan tres aspectos que van más allá de la coyuntura, y que es preciso poner en su pleno potencial.

El 31 de diciembre de este año pierde vigencia la Cláusula de Paz, la cual impide plantear quejas a la OMC en contra de los subsidios a los niveles practicados desde 1992. Por consiguiente si no se llegara a un acuerdo más favorable en relación con las políticas vigentes podrían desatarse batallas generalizadas de represalias comerciales. Por lo tanto los países en desarrollo tienen en esta ocasión la fuerza para aceptar o no la renovación de la Cláusula de Paz en función de lo que los países desarrollados ofrezcan en cuanto a sus posiciones sobre los temas candentes de la agenda.

El segundo aspecto es que el refe-

rido consenso de Washington -que guió las reformas de política en América Latina en los últimos 10 años- ha ido redibujándose a la luz de la evidencia del purismo económico que los sustentaba y la ingenuidad con la que se aceptaba, han merecido una revisión. Desde la Banca Multilateral de Desarrollo, los centros académicos, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos han surgido propuestas para incorporar algunas revisiones al modelo original. Una de ellas es precisamente el reconocimiento de que no existen reglas para el libre comercio sino mas bien medidas que favorecen la transnacionalización de los negocios más grandes.

El tercer aspecto es que la propia OMC ha estado expuesta a fuertes críticas sobre su capacidad y voluntad para ser un genuino foro de diálogo y concertación para una agenda equitativa. La presidencia de la OMC, cambiará próximamente a manos de un país latinoamericano. La pregunta que surge entonces es, si como resultado de la crítica, la reflexión interna y los cambios, la organización va a poder cumplir a cabalidad la función para la cual ha sido creada y en la cual hay tanta expectativa. Para América Latina ello constituye una esperanza.

** Carlos Pomareda es economista agrícola, consultor internacional y actual director ejecutivo de la firma consultora Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial (SIDE) www.agro-servicio.com.*

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES: Por una definición con visión latinoamericana

NICOLA BORREGAARD, ANNIE DUFÉY Y ZULMA GUZMÁN*

Entre los acuerdos de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Doha, de noviembre de 2001, se incluye una ronda de negociaciones que vincula asuntos ambientales y comerciales. Específicamente en el párrafo 31 iii) de la Declaración de Doha, los países miembros de la OMC establecieron su compromiso de reducir o eliminar "las barreras arancelarias y no arancelarias a los bienes y servicios ambientales".

Sin embargo, a nivel multilateral no existe una definición amplia de qué constituye un bien o un servicio ambiental, ni tampoco algún criterio acordado para su clasificación. El comercio de bienes se rige bajo las reglas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y otros acuerdos pertinentes de la OMC, y no existe un capítulo especial para los bienes ambientales. Los servicios ambientales se definen y clasifican de acuerdo a la W/120 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), entre cuyas críticas se haya el estar muy restringida hacia la industria ambiental tradicional -servicios de infraestructura pública, control de la contaminación y manejo de residuos- y que, por lo tanto, no reflejaría su estado actual.

Por ello los países miembros de la OMC han comenzado a elaborar diferentes conceptualizaciones sobre lo que se entiende por un bien o un servicio ambiental, con el fin de identificar aquellos productos que podrían ser favorecidos en las negociaciones. En general, las definiciones difieren

A nivel multilateral no existe una definición amplia de un bien o un servicio ambiental, ni un criterio común para clasificarlo y las propuestas en el debate en la OMC tienden a reflejar los intereses de los países industrializados pues incluyen muy pocos productos de interés comercial para los países en desarrollo. Por otro lado, América Latina en particular, a excepción de Colombia, no ha realizado muchos esfuerzos para desarrollar y promover una definición que incluya aquellos productos en los que es importante mejorar su acceso a mercado según las prioridades ambientales y las oportunidades de exportación de los países. Existen diversos elementos relevantes para abordar una definición de bienes y servicios ambientales desde la perspectiva latinoamericana, así como argumentos a considerar al tomar decisiones, en cuanto a definiciones de bienes y servicios ambientales, nivel y gradualidad de su liberalización.

de país en país y no existe consenso sobre qué productos constituyen bienes y servicios ambientales.

Las propuestas en el debate en la OMC tienden a reflejar los intereses de los países industrializados toda vez que son altamente sesgadas hacia aquellos bienes o servicios en que son exportadores netos e incluyen muy pocos productos de interés comercial para los países en desarrollo. Además, las negociaciones sobre bienes

ambientales deben considerar los objetivos generales de acceso a mercado del párrafo 16 de la Declaración de Doha, donde se establece que las negociaciones deberían dar prioridad a productos de particular interés exportador para los países en desarrollo, tomar total consideración de sus necesidades e intereses, otorgarles tratamiento diferenciado no exigiéndoles reciprocidad en los compromisos de reducción de las barreras al comercio, y promover medidas para asistencia técnica y reforzamiento de capacidades.

Por otro lado, los países en desarrollo, en general y América Latina en particular, a excepción de Colombia, no han realizado muchos esfuerzos destinados a desarrollar y promover una definición conveniente. Es decir, una definición que incluya aquellos productos en que es importante mejorar su acceso a mercado de acuerdo a las prioridades ambientales de los países, así como aquellos productos que presentan ventajas en su exportación.

Hasta el momento hay dos propuestas que se destacan en el debate al interior de la OMC. La primera corresponde a una amplia definición y clasificación de la industria ambiental elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en base a la cual se identifica una lista indicativa de bienes y servicios ambientales que, si bien no fue diseñada en el ámbito del comercio internacional, ha sido avalada y tomada como base por varios países. La otra, corresponde a la propuesta del Acuerdo de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC)

que, en base a la definición y clasificación de la OCDE, identifica una lista de bienes a ser cubierta bajo el acuerdo. Ambas propuestas se basan en productos cuyo uso o finalidad está relacionado con aspectos de manejo, medición, mejoramiento o mitigación de aspectos ambientales y de tecnologías limpias.

Elementos para una definición

Luego, existen diversos elementos que hacen relevante abordar una definición de bienes y servicios ambientales desde la perspectiva de los países de América Latina:

En primer lugar, tanto la propuesta de APEC como la de la CDE tienen un énfasis en productos para el manejo de la contaminación y de tecnologías limpias, sectores donde radican las ventajas comparativas de los países industrializados, siendo la lista de APEC aún más restrictiva para los países en desarrollo.

No están incorporados otros bienes y servicios ambientales no tradicionales, tales como los productos sustentables o ambientalmente preferibles, en que probablemente los países de América Latina presentan ventajas para su exportación. Ejemplo de ello son los productos provenientes de la agricultura orgánica, productos provenientes de manejo forestal sustentable y productos naturales no maderables, entre otros. Otros productos ambientales no tradicionales -como el turismo ecológico y las energías renovables-, si bien se incluyen en la propuesta de la OCDE y también en la de APEC para el caso de energías renovables, requieren de mayores especificaciones respecto a su identificación en el contexto del comercio internacional.

La OCDE desarrolló una larga lista de beneficios de la liberalización de comercio de los bienes y servicios ambientales, entre ellos: una mayor oferta de servicios de recolección de desechos y saneamiento básico; presencia de compañías extranjeras que

crean mayores oportunidades en los campos de educación ambiental, tecnologías limpias, transferencia tecnológica y de "know-how"; además de la disponibilidad de una mayor oferta de tecnologías ambientales dirigidas a resolver problemas ambientales urgentes. Asimismo, la inclusión de los bienes y servicios ambientales no tradicionales dentro de una definición, generarían beneficios adicionales para las economías de América Latina tanto desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Sin embargo, la existencia de imperfecciones de mercado e ineficiencias hacen que los beneficios no sean automáticos, por lo que es necesario que los países de la región elaboren su propia definición y desarrollen su propia lista de beneficios y desventajas de la liberalización que nacen de dicha definición.

En cuanto a los aranceles, se debe destacar que hay una situación muy dispareja entre los bienes ambientales tradicionales y los no tradicionales. Mientras que los primeros gozan, en general, de aranceles muy bajos en los países industrializados y más altos en los países en desarrollo; los segundos gozan, en general, de aranceles bajos en los países en desarrollo y enfrentan aranceles más altos en los países industrializados.

Asimismo, la forma como los consumidores reconocen los productos sustentables es a través de sellos de certificación, los que pueden constituir barreras no arancelarias, por lo que es necesario abordar los criterios y procesos de certificación que deben ser aceptados.

Los procesos de certificación de "productos verdes" han sido estudiados en distintos trabajos de académicos y de organizaciones intergubernamentales. En ellos, se critica que la certificación significa procesos burocráticos, engorrosos y costosos para el exportador de estos productos, en los países de nuestra región. La multitud de sistemas de certificación no

armonizados y la necesidad de avanzar en la acreditación son obstáculos y barreras muchas veces prohibitivas, especialmente para un exportador más pequeño. La situación implica un desafío en términos de capacitación y adecuación de la institucionalidad certificadora en nuestros países, al mismo tiempo que exige cambios a nivel internacional para que realmente nuestros exportadores puedan estar en una situación de equivalencia con los países del norte. También implica un cierto potencial de revertir la discusión sobre los PPMs (medidas dirigidas a procesos de producción), entregando beneficios arancelarios (u otros) a los productos diferenciados.

El análisis de la situación de competencia a nivel internacional requiere también una atención especial al tema de los subsidios pagados actualmente a los productores de bienes ambientales tradicionales, así como a aquellos de bienes ambientales no tradicionales.

En cuanto a los créditos otorgados por parte de algunos países industrializados para la adquisición de ciertos bienes y servicios ambientales, debe interesar particularmente la práctica de conceder los créditos bajo fórmulas "vinculantes". Es decir, que se proporcionan bajo la condición de adquirir estos productos de un exportador del mismo país que da el crédito.

Finalmente, a partir de la inclusión de los distintos servicios de agua en la lista de servicios ambientales -cuya liberalización comercial está muy ligada a flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)-, los países de la región que han iniciado los procesos de privatización en este sector deben discutir si quieren seguir avanzando con el trato del agua como bien privado. Y los países de la región que aún no han comenzado con las privatizaciones en este sector deben enfrentarse a preguntas tales como si están dispuestos a aceptar el trato de agua como bien privado.

ANÁLISIS

Estrategia de negociación

La elaboración de una estrategia de negociación por parte de los países de la región debe basarse en un análisis cuidadoso de éstos y otros aspectos. A continuación se resumen algunos de los argumentos principales que deben ser tomados en cuenta en el momento de tomar decisiones, en cuanto a definiciones de bienes y servicios ambientales, nivel y gradualidad de su liberalización.

- La eliminación de las barreras proporciona, en teoría, mayor eficiencia en el mercado de los bienes y servicios ambientales, a través de una mejora en acceso a mercados, y una mejora en las condiciones de acceso a tecnologías de mitigación de impactos ambientales
- Se puede negociar asistencia técnica en un quid pro quo con subsidios pagados en los países industrializados al fomento de la producción sustentable / tecnologías limpias.
- Se gozaría de rebajas arancelarias importantes en un sector altamente protegido en los países desarrollados (si es que se incluyen los productos sustentables como agricultura orgánica o certificación de manejo forestal sustentable).
- Se aumenta la presión por reconocimiento mutuo y acuerdos de equivalencia técnica a nivel internacional en los productos sustentables (en el caso de incluirlos en la definición).
- La liberalización irrestricta impide el desarrollo de la industria nacional. Puede tener sentido la protección de algunos sectores; sin embargo, a nivel de los países de la región los programas sistemáticos de apoyo son escasos y los recursos destinados limitados. En este sentido se debe analizar si conviene a los países dismantelar lo poco que hay, seguir igual, o elaborar sistemas de apoyo más sistemáticos y sustanciales.

Cuadro. Aspectos relevantes sobre Bienes y servicios ambientales

BSA/Aspecto	Mercado	Aranceles	Barreras No-arancelarias	Subsidios	Otros (créditos vinculantes patentes)
Bienes tradicionales	Importador en general, en algunos países como Chile exportador a nivel regional	Bajos en países industrializados, más altos en países de la región	Múltiples, regulados por OTC	Bastantes en países industrializados, a través de créditos blandos, ayuda directa, I&D	Créditos vinculantes importantes, patentes también
Bienes no tradicionales	Mercado exportador pequeño pero muy dinámico	Altos en países industrializados, más bajos en países de la región	Múltiples, específicamente la certificación, regulado por OTC parcialmente	Significativo y creciente en algunos sectores en países industrializados	*
Servicios tradicionales	Importador en general, exportador a nivel regional en Chile, Brasil, Argentina	**	Múltiples, regulados por el Acuerdo en Servicios, régimen de compromisos, sobretodo en países industrializados	*	*
Servicios no tradicionales	Alguna oferta a nivel doméstico en países seleccionados, algunas exportaciones a nivel regional, importaciones importantes en algunos países		Múltiples, potencialmente regulados por el Acuerdo en Servicios, actualmente ningún régimen de compromisos	*	**

* No se ha analizado la relación.

** No hay una relación relevante

- El carácter local de algunos bienes y servicios ambientales hace que su provisión o involucramiento del resto de los actores locales por agentes foráneos no sea el adecuado.
- Hay argumentos culturales a favor de un tratamiento diferenciado de concesiones y licencias.
- Se pueden reducir las barreras arancelarias y no así las no arancelarias, manteniéndose ineficiencias en el mercado, con lo cual podrían llegar tecnologías poco aptas.
- Apoyo estatal y subsidios a nivel de los países desarrollados son significativos, por lo que una apertura comercial en los bienes y servicios ambientales implica la competencia directa con los productos subsidiados. Ejemplos de esto son los créditos blandos, los subsidios directos, el apoyo con asistencia técnica para el uso de tecnologías limpias, y el apoyo con subsidios y otras ayudas permanentes a productos orgánicos.

Colombia, con una noción distinta

Se considera que las clasificaciones propuestas hasta el momento incluyen únicamente los bienes y servicios en los cuales los países desarrollados poseen ventajas competitivas; mientras excluyen aquellos provenientes de la agrobiodiversidad, en los cuales los países en desarrollo tienen mayores ventajas. Y Colombia, debido al desarrollo tenido en los últimos años en esta materia, ha concebido una noción distinta sobre lo que se entiende por un bien o servicio ecológico.

Un estudio realizado con la Universidad Javeriana de Bogotá, mostró que Colombia es principalmente importador de los productos determinados como ecológicos por los países del Acuerdo de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC). De las 109 posiciones arancelarias de dicha clasificación, Colombia exportó US\$15.893.747 e importó US\$319.874.370 durante el año 2002.

La conceptualización colombiana tiene como punto de partida el cumplimiento de los objetivos que el país se ha planteado en términos ambientales, y la forma en que el incentivo a la producción y consumo de estos bienes y servicios puede ayudar a su cumplimiento. Por esto se han definido como bienes y servicios ecológicos aquellos que, por su extracción, fabricación, finalidad o uso, ayudan en la mejora del ambiente o garantizan la sostenibilidad de los recursos que emplean.

Se propone una clasificación inicial en tres categorías de acuerdo con su grado de elaboración y agregación de valor, en: productos de la biodiversidad, ecoproductos industriales, y servicios ambientales. Dentro de estas categorías, se establecen criterios y conceptos para avanzar en la construcción de la lista de bienes y servicios.

-Productos de la agrobiodiversidad: Aquellos provenientes de la biodiversidad o amigables con ella, que garanticen el buen manejo de los sistemas naturales, la conservación del ambiente y/o la producción agrícola sostenible. Estos se dividen en maderables; productos naturales no maderables; y productos agropecuarios que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

-Eco-productos industriales: Aquellos bienes cuyo proceso productivo tiene un menor impacto sobre el entorno natural, menos contaminantes comparados con sus sustitutos, o que durante su uso generan menores efectos dañinos sobre el ambiente. Estos se clasifican en productos de materias primas maderables; productos procesados no maderables y agropecuarios; productos elaborados a partir de materiales reciclados; y productos o tecnologías para mitigación de impactos.

-Servicios ambientales: Aquellos cuya prestación involucra directamente el aprovechamiento del medio natural, genera un menor impacto relativo sobre el medio, o su finalidad es un manejo más adecuado y eficiente o una mejora en la calidad del ambiente. Entre estos están mitigación y/o control de impactos; remediación de impactos; medición de parámetros relacionados con el ambiente; generación de energías alternativas o uso de combustibles limpios; manejo o administración de los recursos naturales; formación, enseñanza e investigación ambiental; y auditoría y consultoría ambiental.

El gran inconveniente de la clasificación colombiana radica en la forma de identificar o diferenciar los productos para poder otorgar las preferencias, la cual necesariamente involucraría procesos y métodos de producción, lo que ha sido históricamente rechazado por los países en desarrollo.

En la Reunión de Expertos sobre Definición y Dimensiones de los Bienes y Servicios Ambientales para el Comercio y Desarrollo, organizada por UNCTAD en Ginebra, del 8 al 11 de julio de 2003, la delegación colombiana planteó una nueva posibilidad para incluir los bienes provenientes de la biodiversidad dentro de las listas, mediante la simple inclusión de estos, con base en los beneficios que su reconocimiento y valoración en los mercados trae para la conservación de la biodiversidad in situ. De ser así, se deberán determinar los productos en los cuales se tiene interés, elaborar una detallada descripción de los mismos y hacer una propuesta de clasificación dentro del código arancelario, pasos que pueden tomar mucho tiempo antes de hacerse realidad.

- No existe la institucionalidad / capacidad suficiente para elaborar e implementar los sistemas de certificación nacionales, lo que crea una dependencia de la certificación externa (puede integrarse como punto en la asistencia técnica).
- Finalmente, considerando que existe un incipiente pero importante comercio de bienes y servicios ambientales entre los países de la región, debe evaluarse si conviene

considerar primero un enfoque de liberalización a nivel bilateral o intrarregional, antes de avanzar a nivel multilateral.

Nota: La elaboración de este documento fue coordinada por RIDES y Fundación Futuro Latinoamericano. Se enmarca dentro de la iniciativa de diálogo multisectorial sobre comercio y ambiente para América del Sur, Grupo Zapallar. www.ffla.net/grupo-zapallar.

**Nicola Borregaard es Directora Ejecutiva del centro de investigación chileno Recursos e Investigación para el Desarrollo Sustentable (RIDES); Annie Dufey es investigadora de RIDES y actualmente cursa una MA en Políticas de Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad de Sussex, Reino Unido; Zulma Guzmán es Asesora colombiana en comercio y ambiente de diversas entidades y Directora Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economistas Ambientales y de Recursos Naturales (ALEAR).*

DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMERCIO

Hacer realidad el Párrafo 51

VICENTE YU *

El Párrafo 51 de la Declaración Ministerial de Doha de 2001 provee un mandato único pero ambiguo para los Comités de Comercio y Desarrollo (Committee on Trade and Development-CTD) y de Comercio y Medio Ambiente (Committee on Trade and Environment CCMA) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El mandato requiere que ambos comités actúen como un foro para identificar y debatir sobre los aspectos ambientales y de desarrollo de las negociaciones, para poder cumplir el objetivo de reflejar apropiadamente el desarrollo sostenible.

El acuerdo institucional para implementar el Párrafo 51 también ha dado pie al surgimiento de algunas sugerencias de ONGs, como por ejemplo que el CCMA y el CTD realicen reuniones en las que participen representantes de otros sectores; o que dichos comités sirvan como foros en los que se discutan los resultados de análisis realizados a nivel de cada país, relacionados con las implicaciones ambientales de las negociaciones.

Como parte de las acciones para implementar este párrafo fuera del contexto institucional del CCMA y del CTD, algunas organizaciones de la sociedad civil han propuesto la creación de un grupo asesor independiente sobre desarrollo sostenible.

Acciones del CCMA

Ambos comités han enfrentado dificultades con respecto a qué enfo-

La implementación apropiada y efectiva del mandato del Párrafo 51 podría ser la clave para que las negociaciones comerciales de Doha ayuden, de alguna forma, a llenar las necesidades y prioridades que tienen los países en desarrollo; y a ser consistentes en ampliar la preocupación ecológica, de un nivel local a una perspectiva global. Se requiere que los Comités de Comercio y Desarrollo (Committee on Trade and Development-CTD) y de Comercio y Medio Ambiente (Committee on Trade and Environment-CCMA) actúen como un foro para identificar y debatir sobre los aspectos ambientales y de desarrollo de las negociaciones. Hasta la fecha preocupa que el primer borrador del informe del CCMA para la Conferencia Ministerial de Cancún, no contiene información alguna sobre cómo se planea continuar con el mandato del Párrafo 51 después de Cancún.

que tomar. A pesar de que el Párrafo 51 ha figurado como un elemento importante en la agenda de sus reuniones, con las discusiones aún no se ha definido una forma clara de implementar el mandato.

En marzo de 2002 el CCMA inició una intensa discusión sobre cómo estructurar el debate. Algunos Miembros sugirieron reuniones conjuntas -o cooperación- entre el CCMA y el CTD. Otros propusieron que el CCMA se enfoque en temas o escenarios específicos para que brin-

de así insumos a los cuerpos órganos negociadores sobre cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en las negociaciones.

Para octubre de 2002 el CCMA aceptó invitar al equipo de la Secretaría de la OMC para que ilustrara al Comité lo que estaba sucediendo en los otros comités o grupos negociadores.

Hasta la fecha se han realizado cuatro de estas exposiciones, que han cubierto los temas de agricultura, servicios, acceso a mercados (bienes y servicios ambientales), y reglas de negociación de la OMC. Los Miembros han discutido tomando como base esta información, pero sin llegar a conclusiones.

El CCMA debería continuar con este enfoque, como un primer paso para implementar el Párrafo 51. No obstante, el primer borrador del informe del CTD para la Conferencia Ministerial de Cancún, no contiene información alguna sobre cómo planea continuar con el mandato del Párrafo 51 después de Cancún.

Acciones del CCTD

El Comité de Comercio y Desarrollo también ha discutido sobre cómo implementar su propio mandato del Párrafo 51 con sugerencias de los Miembros, como las siguientes:

- que el equipo de la Secretaría de la OMC prepare un informe, que sea actualizado regularmente, y que muestre qué sucede con los temas de desarrollo en otros cuerpos de la OMC (tales como coo-

ANALISIS

peración técnica, trato especial y diferenciado, transferencia de tecnología, deuda y finanzas;

- que los dirigentes de las sesiones ordinarias del CCMA y el CCTD se mantengan informados unos a otros del progreso en la implementación del Párrafo 51, en sus foros respectivos; y,
- solicitar al equipo de la Secretaría de la OMC que brinde al CTD la información sobre lo que hacen los otros grupos en cuanto a la agenda de desarrollo.

Hasta la fecha, sin embargo -y a diferencia del CCMA-, no ha habido mucha claridad o consenso en el enfoque que el CTD usará para implementar este párrafo.

Recomendaciones

Para implementar completamente el Párrafo 51, tanto el CCMA como el CTD deben centrarse en dos aspectos: cómo identificar y debatir sobre los temas ambientales y de desarrollo de las negociaciones comerciales de Doha; y cómo filtrar y reflejar el producto de dicho debate en las principales negociaciones que se están dando.

Como el Párrafo 51 tiene como fin que el desarrollo sostenible se refleje de forma apropiada en las negociaciones de Doha, este objetivo debe ligarse a varios instrumentos internacionales relacionados con el tema, tales como la Declaración de Río de 1992, que reconoce la importancia de dar una principal prioridad a las necesidades de los países en desarrollo.

De esta forma se deben analizar los potenciales impactos de las negociaciones comerciales de Doha en países en desarrollo relacionados con:

- reducción de la pobreza y desarrollo económico;
- la efectiva operacionalización e implementación del principio comercial de trato especial y diferenciado y el principio ambiental de responsabilidades comunes y diferenciadas en las obligaciones internacionales económicas y ambientales;
- uso, consumo y manejo de recursos naturales y necesidades en materia de conservación en países en desarrollo.

Para enfocarse en estas prioridades se puede buscar el apoyo y la experiencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para el tema de los impactos ambientales de la liberalización comercial, especialmente en países en desarrollo; y de la UNCTAD, para el tema de los impactos de dicha liberalización en el desarrollo.

También podrían ser beneficiosas las contribuciones que puedan hacer los Miembros con respecto a sus experiencias a nivel nacional bajo la implementación del Párrafo 33 de la Declaración Ministerial de Doha.

El aporte de las organizaciones de la sociedad civil también debe buscarse para enriquecer el diseño y uso de esta herramienta.

Algunas ONGs, tales como el Center for International Sustainable

Development Law y el International Institute for Sustainable Development (IISD), han sugerido usar una metodología que integre las consideraciones ambientales y de desarrollo.

Esto pueden hacerlo los Miembros a nivel nacional, o los comités de CCMA y CTD, los cuales deberían tener la potestad de hacer recomendaciones a los diferentes grupos negociadores para asegurarse que los resultados de las discusiones sobre el Párrafo 51 en dichos grupos, se hagan efectivas.

Los resultados y sugerencias deben ser claras y de fácil traducción, incluso para instituciones de limitados recursos, de forma que se puedan integrar como acciones concretas y específicas dentro del contexto de negociación.

Nota: Este artículo es una versión traducida y resumida del artículo publicado por el autor, "Reflecting Sustainable Development in the Doha Trade Negotiations: Implementing Paragraph 51 of the Doha Ministerial Declaration", en Bridges No. 5, Junio 2003.

** Vicente Yu es Oficial de Proyectos de Reforma institucional de la OMC, en el South Centre - Trade and Development Work Program. Los puntos de vista expresados en este artículo son propios del autor y no deben ser atribuidos al South Centre o a sus estados Miembros.*

Apertura y participación en las negociaciones comerciales:

Un futuro posible

VÍCTOR HUGO RICCO Y
MARÍA CECILIA WEDEMEYER *

Las fuertes reacciones antiglobalizadoras, y más específicamente las anti-ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y anti-OMC (Organización Mundial de Comercio), que se manifiestan a lo largo del continente americano, expresan inquietudes agudas de algunos sectores de la sociedad sobre los eventuales impactos sociales y ambientales de una mayor integración económica regional.

Esta reacción es la lógica reacción de un amplio sector de la sociedad que ha sido sistemáticamente excluido de los procesos de negociación comercial, por lo cual teme y desconfía sobre las intenciones de los mismos, por la falta de información, de mecanismos de participación y de acceso a la justicia.

No hace falta plantear el debate desde una postura pro- o anti-comercio, como muchas veces se hace. Evidentemente el comercio internacional y la integración comercial tendrán -para la gran parte de los individuos y comunidades del continente- un enorme impacto, a veces positivo y a veces negativo. Pero la cuestión de fondo es si todos tendrán la oportunidad, los mecanismos, y las garantías de hacer escuchar sus opiniones e inquietudes y, de ser necesario, también sus quejas formales, sobre cómo se organiza el comercio internacional y cómo éste tiene un impacto sobre las personas, comunidades y sobre el ambiente.

Las negociaciones comerciales internacionales fueron tradicionalmente -y lo siguen siendo en lo formal-, un ámbito casi exclusivo de los Estados Nacionales, a pesar de que en las últimas décadas se evidencia una tendencia a incorporar intereses sectoriales, a través de la participación de algunos sectores privados y de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta incorporación carece, hasta la fecha, de garantías y es-

Los esfuerzos de la sociedad civil para introducir algún tipo de participación pública, recomendaciones han sido -hasta la fecha- una lucha ardua y difícil que aún está en curso, especialmente en relación a cláusulas de protección a los derechos humanos y el ambiente, y las referidas a mitigar los impactos negativos del libre comercio en las comunidades locales. En la próxima Reunión Ministerial de la OMC, en Cancún, México, la participación, el acceso a la información y a la justicia estarán incluidos entre las inquietudes más importantes de la sociedad civil, cuestión que no debe escapar a la consideración de los negociadores.

estructuras formales que aseguren la transparencia, la equidad y la justicia del comercio internacional.

El sector privado participa en las negociaciones comerciales desde que éstas iniciaron por un lógico interés propio, y logra insertarse por la fuerte influencia económica y el tradicional acceso directo a funcionarios de Gobierno. Por otro lado, la sociedad civil participa, en general, para defender el interés público, apuntando a proteger y garantizar los derechos humanos. Su inserción es más difícil y resistida por los Gobiernos, ya que entorpece el libre camino de negociación en materia comercial, del cual gozan tradicionalmente los Estados fuertemente alineados con los intereses comerciales privados.

En los tratados comerciales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), y en los tratados comerciales

regionales como el NAFTA (North American Free Trade Agreement), el MERCOSUR y más recientemente el proceso del ALCA, los Estados se han visto obligados a reconocer y flexibilizar las agendas ante necesidades imperiosas como son el desarrollo sostenible, la protección ambiental y el respeto por los derechos humanos; pero son pocos los esfuerzos para incorporar la opinión y participación de organizaciones de la sociedad civil. Generalmente, esta participación ocurre fuera de los ámbitos de negociación y toma de decisiones, obligando a la sociedad civil a reaccionar ante hechos ya concretados y desde espacios extra-oficiales. Así se genera una situación tensa y conflictiva con las diversas instituciones de comercio internacional.

Las resistencias a la participación se dan de diversas maneras, un claro ejemplo de ello fue la cuarta reunión de la OMC en Doha, Qatar, localidad árabe sumamente aislada y de difícil acceso (económico- y político), en donde se observó cómo las estructuras internacionales comerciales crean barreras para excluir a la opinión externa. En dicha reunión, las complicadas circunstancias de acceso, sumado al proceso cerrado y limitado de inscripción por parte de la OMC, hizo que muy pocas ONGs latinoamericanas pudieran asistir a la misma. Por más que se hubiera logrado una mayor presencia de la sociedad civil, la falta de voluntad para distribuir textos de negociación y permitir el contacto con los funcionarios públicos, complicó más aún la participación de los pocos representantes no-gubernamentales que asistieron a dicha Ministerial.

La participación como derecho

El artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana indica: "La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una

condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia".

Es indiscutible que en el último cuarto de siglo la participación de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones sobre cuestiones relativas al desarrollo, ha sido de suma importancia, dándole mayor legitimidad, relevancia, y efectividad a los procesos de diálogo entre Estados e instituciones intergubernamentales. La tendencia global se perfila claramente para buscar formas de asegurar el acceso a la información y a la justicia en todo proceso social, y de incorporar la participación en instancias donde la misma puede contribuir a la mejor formulación de estrategias, implementación de proyectos, protección de derechos humanos y monitoreo de obligaciones estatales y privadas.

En algunas regiones y en muchos países, el "derecho" a participar y acceder a información ya ha sido legislado. La misma Convención Americana otorga el derecho a la información en su artículo 13. En Europa, la Convención de Aarhus garantiza el derecho a la participación, el acceso a la información y la justicia en materia ambiental. Los procesos internacionales de negociación comercial en el hemisferio americano, no deben ser la excepción a esta tendencia ni al cumplimiento de lo expresado en tratados internacionales.

Los esfuerzos de la sociedad civil para introducir algún tipo de participación publica mediante opiniones o recomendaciones han sido -hasta la fecha- una lucha ardua y dificultosa que aún está en curso, especialmente en relación a cláusulas de protección a los derechos humanos y el ambiente, y las referidas a mitigar o impedir los impactos negativos del libre comercio en las comunidades locales.

En busca de derechos participativos

Los derechos de participación, acceso a la información y a la justicia han sido reconocidos regional e internacionalmente como fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. Estos derechos tienen una característica particular, pues son sustanciales en sí mismos y a su vez son instrumentales para el ejercicio y goce de otros derechos humanos, de ahí

su mayor importancia.

A nivel regional un gran número de representantes de la sociedad civil ha presentado formalmente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) -en la II Reunión anual de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la OEA-, el requerimiento de la necesidad de iniciar un proceso de negociación para redactar un documento oficial vinculante y hemisférico. La idea es que éste consagre los derechos de participación, acceso a la información y justicia de la sociedad civil, en cuestiones que ciertamente van a tener impacto en sus vidas e involucran un interés hemisférico, incluyendo evidentemente el ámbito comercial.

Otras demandas de participación de la sociedad civil se han presentado en ámbitos como la OEA, la OMC, y en la última Reunión Ministerial del ALCA, realizada en Quito en 2002, y todas han reclamado la necesidad de esclarecer la manera de participar en los procesos y ámbitos comerciales.

En junio de 2001, el Centro Austral de Derecho Ambiental (CEADA), la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia en contra del Estado de Chile por violaciones al derecho a la información y participación social en asuntos públicos relativos a biotecnología, bioseguridad y liberación de transgénicos. Este es un tema de gran interés para la agenda del ALCA y de la OMC, que ahora está siendo sometido a consideración de uno de los tribunales de derechos humanos más importantes del planeta.

El caso demuestra cómo la falta de participación y acceso a la información brindada a la sociedad (en este caso sobre transgénicos) genera inquietudes en la misma. Uno de los temas principales a debatir ante la Comisión Interamericana es la capacidad y obligación del Estado de producir y difundir la información a los ciudadanos, una decisión que seguramente establecería un importantísimo antecedente sobre la inclusión de la sociedad en el diseño e implementación de las políticas públicas relativas al comercio.

Apertura y participación

La sociedad civil debe ser consciente de que el acceso a la información y el derecho a la participación pública son derechos humanos, que deben ser exigidos ante todo organismo público, nacional e internacional. Los Estados y las organizaciones internacionales tienen la obligación de permitir la participación en los procesos de adopción de decisiones en el ámbito de las negociaciones comerciales, a fin de asegurar un desarrollo sostenible, protector del ambiente y de los derechos humanos. Para ello, deben crear mecanismos efectivos, regulares, transparentes y sistemáticos de participación, acceso a la justicia y divulgación de información.

Asimismo, la sociedad civil debe capacitarse para conocer sus derechos y los mecanismos que existen para participar, fomentar y defender los derechos de acceso a la información, participación y justicia; autoevaluar los mecanismos de participación, mediante el monitoreo y revisión constantes, así como también comprometerse a colaborar mediante diálogos constructivos con los Estados y las organizaciones internacionales, a través de mecanismos de participación factibles y reales. Es necesario presionar constructivamente para que estos procesos se flexibilicen y se abran a la participación.

En la próxima Reunión Ministerial de la OMC, en Cancún, México, y en la Ministerial del ALCA, a realizarse en noviembre, en Miami, nuevamente la participación, el acceso a la información y a la justicia estarán incluidos entre las inquietudes más importantes de la sociedad civil. Es un paso muy importante que los organizadores de la reunión del ALCA hayan accedido a realizar un encuentro formal paralelo de la sociedad civil. Que este evento tenga repercusión e inserción formal, regular, transparente y vinculante en el proceso de negociaciones gubernamental, es otra cuestión que no debe escapar a la consideración de los negociadores.

** Víctor Hugo Ricco y María Cecilia Wedemeyer son miembros del Staff del Centro de derechos humanos y ambiente (CEDHA), Argentina, y trabajan en el Programa Comercio Sustentable.*

Solución de Diferencias

¿Cuáles son los intereses de América Latina?

MATEO DIEGO-FERNÁNDEZ*

Uno de los elementos centrales de la Agenda de Doha es la negociación para las "mejoras y aclaraciones al Entendimiento sobre Solución de Diferencias". Cualquier resultado en las negociaciones de agricultura, de acceso a los mercados y otros temas sólo tiene sentido si se cuenta con la certeza de que la OMC tiene las herramientas para lograr que se respeten las concesiones negociadas.

La revisión del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) es un ejercicio previsto desde la finalización de la Ronda Uruguay. La decisión Ministerial de entonces, "invitaba" a realizar un "examen" del ESD dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC. A más tardar en diciembre de 1998 se debía tomar la decisión de "mantener, modificar o dejar sin efecto" las normas y procedimientos del entendimiento. No obstante, las múltiples propuestas presentadas entonces y la falta de una guía concreta impidieron terminar con los trabajos a tiempo. Entonces, se tomó la decisión de continuar el ejercicio hasta finales de julio de 1999.

Curiosamente, la "crisis del banano" a finales de 1998 y principios de 1999 contribuyó a que la negociación comenzara a tomar forma. La decisión de Estados Unidos de tomar represalias en contra de la Unión Europea (UE) y la insistencia de ésta sobre la necesidad de llevar el asunto a panel pusieron en evidencia la contradicción entre el artículo 21.5, por un lado, y los artículos 22.2 y 22.6, por el otro. Mientras el primero exigía llevar el asunto a "los presentes procedimientos de solución de diferencias", incluyendo un panel de 60 días, los otros obligaban a suspender concesiones dentro de los treinta días siguientes a la expiración del plazo para cumplir. Esto se ha conocido como el problema de la "secuencialidad". Fue entonces cuando un grupo de Miembros decidie-

América Latina es una de las regiones que acuden al mecanismo de solución de diferencias y que contribuyen a mejorarlo, y además ha tenido victorias importantes en este mecanismo. La participación de la región en la negociación del ESD también ha sido destacada. Algunas de sus propuestas han sido incorporadas al documento de trabajo elaborado por el Presidente del Comité; por ejemplo, conceptos de trato especial y diferenciado; sin embargo, muchas ideas se quedaron por fuera. Por otra parte, EE.UU. y la UE tienen mayor peso político y pueden resolver más problemas sin necesidad de acudir a un procedimiento legal. Nosotros no, por lo que es importante que los países de América Latina unan sus intereses y busquen elementos comunes que permitan obtener beneficios tangibles de esta negociación.

ron enfocarse en resolver ese problema.

No obstante, el alto grado de apoyo que tuvo esta propuesta, no logró consenso para el 31 de julio de 1999, pero tampoco hubo consenso para extender nuevamente el plazo. Sin mandato por parte del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y con la Ministerial de Seattle a cuatro meses de distancia, las negociaciones continuaron de manera informal bajo la Presidencia de facto del entonces Ministro Consejero de la Misión de Japón, Yoichi Suzuki.

Seattle fue un fracaso y también lo fue la negociación del ESD. El "Grupo de Suzuki" generó un texto sobre cuatro temas: secuencialidad; derechos de terceros; reducción de plazos; y algunas mejoras técnicas. Este texto se presentó como una propuesta por un grupo de

países, pero quedó en el olvido. Después intentaron que el Consejo General adoptara esta enmienda, pero todo fue inútil. El momentum se había perdido.

En Doha, con muchos otros temas en mente y sin el entusiasmo de antes, lo único que se obtuvo fue el párrafo 30 de la Declaración, donde se ordenaba a negociar con base "en la labor realizada hasta ahora, así como en las propuestas adicionales que presenten los Miembros". La negociación debía rendir frutos en mayo de 2003.

La negociación de Doha

El cumplimiento del mandato de Doha se encomendó al OSD en Sesión Extraordinaria, un órgano distinto del Órgano de Solución de Diferencias, que reporta al Comité de Negociaciones Comerciales. El Presidente de este órgano es el Embajador de Hungría, Peter Balas.

Algunos países esperaban que la negociación se concentrara en finalizar la propuesta que fracasó en Seattle, porque consideraban que era el único objetivo realista, dado el corto plazo con que se contaba. No obstante, la invitación para presentar propuestas adicionales fue acogida con tanto entusiasmo que se hicieron proposiciones para enmendar casi todos los artículos del ESD, así como para añadir algunos otros y un nuevo apéndice.

La negociación se dividió en dos etapas: hasta finales de 2002 se debían examinar las "propuestas conceptuales"; esto es, ideas generales de cómo mejorar o aclarar el acuerdo. A partir de enero de 2003, la negociación debía concentrarse en propuestas de texto legal. En otras palabras, se debía poner las propuestas conceptuales en blanco y negro.

Conforme avanzó la negociación, ésta se fue haciendo más intensa. Para abril, el OSD en Sesión Extraordinaria se reunía tres veces a la semana y para mayo se incluyeron las reuniones en las noches y domingos. No obstante, el gran

número de propuestas y la falta de consenso hicieron que los trabajos se dificultaran y el primer texto del Presidente salió dos semanas antes de que expirara la fecha límite. El 31 de mayo llegó y obviamente no hubo acuerdo en nada. ¿Qué hacer?

Evidentemente el nivel de ambición no era el mismo entre las delegaciones. Muchas de ellas manifestaron que podían vivir sin cambios al ESD. Otras opinaban que lo mejor era extender los trabajos por un plazo breve y sobre la base del texto del Presidente. El ala más ambiciosa propugnaba por continuar los trabajos sobre la base de todas las propuestas presentadas y que el texto del Presidente se tomara como una sola de ellas. Otra discusión importante se refería a si la negociación debía continuar fuera del "todo único" ("single undertaking").

Después de varias discusiones informales en el Consejo General, el 24 de julio se adoptó la decisión de extender el mandato hasta mayo del 2004. También acordó sostener una reunión conceptual después de Cancún, en donde se examinarán, entre otras cosas, los problemas a los que es necesario dar prioridad. La negociación continuará fuera del "single undertaking".

¿Qué incluye el texto del Presidente y qué no incluye?

El Presidente del OSD, al elaborar su texto, trató de ser lo más amplio posible. De hecho, abarca una buena cantidad de disposiciones e inserta algunas nuevas. Así, vemos que incluyó propuestas conocidas como las destinadas a mejorar los derechos de terceros, a crear un procedimiento de secuencialidad, a reducir plazos y a hacer algunas mejoras técnicas. Sin embargo, también incluyó nuevos conceptos, como el de introducir el concepto de pago por gastos y costos judiciales e información confidencial. Al haber adoptado elementos de varias propuestas, este texto goza de un apoyo considerable.

Sin embargo, el texto del Presidente no contiene muchas de las propuestas ambiciosas. Por ejemplo, no incluye el concepto de panelistas permanentes. Además, se queda corto en la parte de

remedios comerciales, así como en la parte de beneficios para los países en vías de desarrollo.

El mecanismo desde la perspectiva de América Latina

América Latina es una de las regiones que acuden al mecanismo de solución de diferencias (MSD) y que contribuyen a mejorarlo. Ecuador, al protagonizar el primer panel de cumplimiento contra la UE, en el asunto del banano, llevó el sistema a límites desconocidos hasta entonces. Brasil ha sostenido con Canadá una de las series de paneles más exhaustiva de los últimos tiempos en su caso sobre "aeronaves". Latinoamérica ha tenido victorias importantes en este mecanismo. Además de los casos señalados, podemos recordar la contundente victoria de Perú, en el caso de "sardinias" contra la UE, la de Costa Rica, cuando ganó el caso de "ropa interior" a Estados Unidos.

Además, conforme pasa el tiempo, la participación de América Latina cobra mayor importancia. En 2002, Argentina inició cuatro casos; Brasil, cinco; Chile dos; y México uno. En lo que va del año, Argentina ya presentó un caso, Guatemala uno; México tres y Nicaragua uno.

Otra señal que vale la pena considerar es el número de disputas entre países de América Latina. Desde enero de 2002, Chile ha demandado a Perú y Uruguay; Argentina a Perú y Chile; y tanto Nicaragua como Guatemala han impugnado medidas adoptadas por México.

Los datos anteriores no toman en cuenta, desde luego, el número de casos en los que países de nuestra región han participado como terceros. Basta decir que Chile y México han sido bastante activos en esta área.

La participación de América Latina en la negociación del ESD también ha sido destacada. Podemos mencionar las propuestas de Ecuador para mejorar el esquema de compensación; Costa Rica en derechos de terceros; Paraguay en reforzar los procedimientos de buenos oficios, conciliación y mediación. Asimismo, un grupo de países, que incluyen a Cuba y Honduras han propuesto mejoras sobre diversos aspectos, incluido el trato especial y diferenciado y la prohibición a las comunicaciones amicus cu-

riae; México en reducir los incentivos para imponer o mantener medidas ilegales; Chile, que junto con EE.UU. propone dar flexibilidad y control a las partes en un procedimiento; y Brasil en procedimientos acelerados para medidas que ya han sido declaradas incompatibles.

Algunas de estas propuestas fueron incorporadas en el texto del Presidente del OSD. Por ejemplo, buena parte del texto costarricense sobre derechos a terceros ha sido incluido. Además, la propuesta de Chile/EE.UU. de introducir una etapa de reexamen en la apelación también fue incluida. Asimismo, hay conceptos de trato especial y diferenciado que fueron incluidos. Sin embargo, muchas propuestas de la región no fueron incorporadas. Por ejemplo, la propuesta sobre procedimientos acelerados de Brasil intenta resolver un problema que hemos visto en la práctica, pero sencillamente no llegó al texto.

Conclusiones

Mientras más activos son los países en el mecanismo de solución de diferencias, más importancia deben dar a la negociación del ESD. Además, es importante tomar en cuenta que las concesiones que se obtengan en agricultura o cualquier otro tema de la región deben poder ser efectivamente cumplidas. Por otra parte, EE.UU. y la UE tienen mayor peso político y pueden resolver más problemas sin necesidad de acudir a un procedimiento legal. Los países de nuestra región no tienen esa capacidad.

Es importante que los países de América Latina unan sus intereses y busquen elementos comunes que permitan obtener beneficios tangibles de esta negociación. Si bien no podemos adoptar un enfoque de "única talla" para todos, se puede decir con cierta seguridad que los países de Latinoamérica buscan seguir utilizando el mecanismo de solución de diferencias y que requieren la seguridad de que los demás países respeten los resultados de los paneles. Una mejora en el área de medidas comerciales podrá beneficiar directamente a muchos países de la región.

**Mateo Diego-Fernández es Consejero en la Misión de México ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza.*

CAFTA: Encrucijadas entre comercio y ambiente

La forma en que se aborda el tema de comercio y ambiente en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) y los puntos de convergencia entre las propuestas de cada parte se abordó en una discusión titulada "CAFTA: Encrucijadas entre Comercio y Ambiente", el 10 de julio de 2003 en San José, Costa Rica.

En ésta se trató el uso de la cooperación internacional en materia técnica como uno de los principales temas.

Amparo Pacheco, directora de aplicación de acuerdos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, y encargada de procesos de consulta con la sociedad civil en el proceso de negociación del CAFTA se refirió, como parte de los antecedentes, al tratamiento del tema ambiental en las negociaciones comerciales anteriores. Recordó que en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) se negoció un capítulo sobre medio ambiente, y que tanto en el TLC Costa Rica-Canadá como en los tratados entre EE.UU. y Jordania, Singapur y Chile se incluyó este tema.

También explicó cuál es la propuesta de Centroamérica y cuál la de EE.UU. y los puntos de convergencia entre ambas que incluyen: la obligación principal de cumplir la legislación interna de cada país, crear un mecanismo de consultas, crear una institución central, y crear mecanismos de cooperación entre los países.

¿Qué ocurrió en la Ronda de negociación que se llevó a cabo en Honduras al respecto? Emile Rojas, negociador por parte del Ministerio de Ambiente de Costa Rica informó que se entregó a EE.UU. una contrapropuesta de parte de Centroamérica y EE.UU. entregó su texto para un Acuerdo de Cooperación Ambiental como instrumento jurídico independiente.

Sostuvo que "La cooperación internacional en materia técnica y financiera no puede ser un elemento accesorio, debería ser precisa y clara, tener claro el apoyo económico que se va a recibir en la región centroamericana".

En esto coincidió Marielos Alfaro, consultora ambiental de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada y quien representaba a parte del sector empresarial. "El tema de la cooperación no puede quedar por fuera del tema ambiental".

Agregó que el sector que representa está en desacuerdo en vincular los incumplimientos ambientales a sanciones comerciales y que más bien debe prevalecer el derecho de cada parte para establecer su propia legislación ambiental y adquirir compromisos internacionales.

Otra posición sumamente crítica fue la externada por Ottón Solís, ex-ministro de planificación y política económica de Costa Rica, y ex-diputado, quien expresó que "a partir de la identificación del país que queremos se debe pensar en qué tipo de tratado se quiere y con quién se quiere

re firmar ese tratado y eso no es lo que ha pasado en el caso del CAFTA, por eso muchos sentimos que estamos chocando con grandes muros".

"Algunos creemos que Costa Rica tiene su ruta de competitividad futura basada en el medio ambiente pues el mercado mundial cada vez se enfoca más en premiar la protección del medio ambiente", agregó.

Según Solís, la dinámica de la negociación debió haber sido: a partir de lo que se ha logrado en el ambiente, qué reconocimiento se va a dar en materia arancelaria en agricultura, por ejemplo, y qué premios se pueden lograr a partir de lo que se ha hecho en protección a la naturaleza.

La posición de los EE.UU. fue reflejada por Todd Chapman, oficial de política económica de la embajada de este país en Costa Rica: "El CAFTA es parte de una estrategia global que tenemos en libre comercio de encaminarse hacia un mundo con menos barreras comerciales y mayor generación de riqueza. El Gobierno de EE.UU. está muy comprometido con la promoción de políticas ambientalistas en sus negociaciones comerciales".

¿Cuál es el impacto de los TLCs sobre el medio ambiente?, preguntó. "Una política con reglamentación ambiental robusta es fundamental, los mismos inversionistas involucrados en las negociaciones están exigiendo que se fortalezcan las regulaciones ambientales. Los TLCs permiten a los países pobres superar sus problemas ambientales, les permiten fortalecer sus regulaciones en este sentido".

Kenneth "Buddy" Mackay, ex-gobernador de la Florida y enviado especial para asuntos con América Latina durante la administración Clinton, explicó como parte de los antecedentes que George Bush logró la aprobación del Trade Promotion Authority (TPA) porque el Congreso lo hizo comprometerse a que habría un vínculo entre comercio y desarrollo sostenible, y que se protegerían los recursos naturales en la negociación de tratados comerciales.

Pactos empresariales en Nueva Orleans

La VI Ronda de negociaciones comerciales se realizó a fines de julio en la ciudad de New Orleans, EE.UU., en la que textileros, lecheros, arroceros y porcicultores centroamericanos se acercaron a los productores estadounidenses de cada sector, para que acuerdos privados permitan desentramar la negociación del tratado.

A la delegación estadounidense le gusta la idea de que surjan nuevas alianzas. Barbara Bowie-Whitman, coordinadora de política comercial para el hemisferio en el Departamento de Estado, recordó que un TLC para el siglo XXI no contempla exclusiones, aunque sí tratamientos especiales para algunos bienes.

En la semana del 28 de agosto, en El Salvador, paralelamente a la próxima reunión preparatoria centroamericana, sesionó la mesa de negociación agrícola para tratar de avanzar en varios de los temas difíciles.

Miguel Schyfter, presidente del Consejo de Cuotas Textiles, dijo que los textileros centroamericanos y estadounidenses se reunieron entre el 11 y el 13 de agosto en Nueva Orleans, para acercar posiciones hacia un eventual acuer-

do. Mientras, el sector lechero regional se reunió en la ciudad de Miami –Florida–, el 15 de julio, con los representantes de los estadounidenses. Alejandro Hernández, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica, informó que el 4 de agosto se reunieron los productores centroamericanos de pollo en Guatemala. Los poricultores también se unirán pronto a esta estrategia, pues hacen los contactos para reunirse con las organizaciones de la contraparte.

Ley de Bioterrorismo trae nuevas reglas

El 12 de diciembre de este año entrará en vigencia la Ley de Seguridad de Salud Pública y Respuesta al Bioterrorismo, mejor conocida como "Ley contra el bioterrorismo", por medio de la cual Estados Unidos exigirá inscripción previa del exportador, del material exportado y del importador.

El Gobierno de este país argumenta que el objetivo de la medida es luchar contra las armas biológicas y protegerse así contra ataques como los del ántrax. La propuesta de ley la hizo pública la administración del presidente George W. Bush el 12 de junio del año pasado.

EE.UU. abrió un período para recibir comentarios de los sectores interesados, tal como se establece en los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), plazo que ya venció y ahora, aunque las normas no estén aprobadas en el trámite legislativo del Congreso, se pondrán en vigencia en diciembre próximo.

La preocupación general para los países latinoamericanos es determinar si la nueva legislación frenará el ingreso de productos a territorio estadounidense y si los requisitos

elevan el costo de las exportaciones y en qué montos. Otras consultas hechas por los exportadores se refieren a la forma como se relacionan la Ley contra el Bioterrorismo y los acuerdos en la OMC.

De acuerdo con la Ley se exigirá la inscripción previa de instalaciones para producir alimentos, información sobre lo que se quiere vender, quién lo envía, qué firma lo transporta y la empresa o empresario que lo recibe en EE.UU. Se debe inscribir la mercancía por enviar, máximo cinco días antes y mínimo 12 horas previas.

La legislación exige que las instalaciones dedicadas a industrializar o empacar alimentos deben registrarse en Estados Unidos y esto abarca desde las plantas empacadoras de frutas y verduras, como las de banano, piña, melón y tubérculos, hasta las de agroindustria, entre ellas las de lácteos y carnes.

¿Problemas u oportunidades?

Algunos sectores se preguntan si los requisitos que impondrá EE.UU. pueden impedir la incorporación de nue-

vas empresas a la fuerza exportadora y están preocupados de que la nueva gama de reglas sea difícil de cumplir rápidamente por empresas pequeñas y medianas, las cuales pueden ver frustrado su intento de vender en este mercado.

Inicialmente el registro previo de instalaciones se puede hacer a través de Internet. Asimismo, el exportador debe reportar sus características personales o empresariales, las del producto que envía, toda la información del transportista y de la compañía o persona que lo recibirá en los EE.UU., lo cual puede hacer a través de Internet igualmente. EE.UU. exige que la información sea adecuada para rastrear el producto en todas sus etapas. En el caso del banano puede hacerlo desde la plantación hasta la bodega de su destino. Si los datos no coinciden o hay algún problema, el producto puede ser devuelto o destruido.

Los exportadores consideran que existen tres puntos fundamentales en este nuevo proceso. Primero, la información y el plazo; se debe conocer con claridad lo que se pide y contar con tiempo suficiente para cumplir; pero en este caso aún no se tienen claros los detalles de los requisitos. Segundo, los costos; la inversión para cumplir con los nuevos requisitos no debe sacar del mercado a algunas empresas. Y tercero, sin barreras: los requisitos deben ser racionales, puntuales e inteligentes para que no se conviertan en barreras no arancelarias al comercio.

Además, la idea es que si se firma el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. (CAFTA), empien a exportar otros sectores; sin embargo, en el mismo contexto de las negociaciones, los exportadores se han quejado de que la principal traba son medidas como la que ahora se pondrá en marcha.

Si desea mayor información sobre la Ley de Bioterrorismo, puede consultar la página de la Food and Drug Administration (FDA) sobre la ley:

<http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html>

Cauteloso recibimiento a reforma en UE

Luego de una maratónica reunión de 16 horas, que se llevó a cabo el 26 de junio en Luxemburgo, los ministros de agricultura de la Unión Europea (UE) finalmente llegaron a un compromiso para reformar algunos puntos de la Política Agrícola Común (PAC). Este anuncio ha sido recibido con cautela por algunos socios comerciales de la UE como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Brasil, y por grupos de la sociedad civil que consideran que las reformas planificadas no son suficientes para detener la sobreproducción en Europa ni para evitar el dumping de productos agrícolas de los países en desarrollo.

Originalmente la propuesta de Franz Fischler, el Comisario europeo de agricultura, sugería un corte total a los subsidios agrícolas para el 2004. Sin embargo, la decisión

aprobada por la Comisión permite a los países miembros mantener un vínculo limitado entre subsidios y producción bajo determinadas condiciones.

Según la reforma, la mayoría de los antiguos 'premiums' que se pagaban bajo la PAC serán facturados en un 'pago único a la finca', que será independiente de la producción y estará más bien vinculado al cumplimiento de lineamientos ambientales, de seguridad alimentaria y de buen trato a los animales. Este pago único a la finca entrará en vigor en el 2005, a pesar de que los estados miembros pueden aplicar a un período de transición hasta el 2007. Los fondos que se ahorren como consecuencia de la reducción de la ayuda a los grandes productores serán destinados al desarrollo rural, pilar de la PAC. En todo caso, el total de los pagos al sector agrícola no disminuirán significativamente al parecer. Más bien, los cambios permitirán transferir estos recursos a la "caja verde" bajo el Acuerdo de Agricultura de la OMC. (Recuérdese que los subsidios de la caja verde están exentos de reducciones ya que se los considera como no distorsionantes o mínimamente distorsionantes del comercio).

Opiniones sobre la reforma

El Comisario Fischler describió la decisión de los ministros como "el comienzo de una nueva era". "Le estamos diciendo adiós al viejo sistema de subsidios que distorsionaba significativamente el comercio internacional y perjudicaba a los países pobres" dijo, y agregó que con esta decisión la Unión Europea ha incrementado su poder de negociación en la actual ronda de negociaciones de Doha, poder del que solo hará uso en caso de que reciba algo a cambio.

"No se trata de un desarme unilateral", advirtió. "La pelota está ahora en el campo de otros países, como EE.UU., cuyas políticas agrícolas continúan siendo altamente distorsionantes e incluso se han incrementado", dijo al referirse al presupuesto agrícola 2002 de EE.UU., que incrementa los subsidios al sector agrícola en un 80%, al punto de llegar a \$82 billones para la próxima década.

Carlos Pérez del Castillo, actual presidente del Consejo General de la OMC, se refirió a la reforma de la PAC como "un paso en la dirección correcta" y señaló que se requiere un análisis más profundo para saber qué impacto tendrá en las negociaciones sobre agricultura de la OMC.

El ministro de comercio de Australia, Mark Vaile, dijo que se trata de un "pequeño pero positivo paso" mientras Brasil, socio de la UE en el Grupo de Cairns, se refirió a la decisión como "un signo de flexibilidad". El Ministro de comercio de Canadá calificó la reforma como "alentadora". Por su parte, el director general de la OMC, Supachai Panitchpakdi, le dio la bienvenida al acuerdo y dijo que este podría contribuir a romper el bloqueo en el que se encuentran las negociaciones sobre agricultura.

Robert Zoellick, representante comercial de EE.UU., señaló que "es crucial que la UE tome pronto la delantera con reformas comerciales significativas". Solo así podrá EE.UU. "trabajar con la UE y otros socios con miras a

avanzar en las negociaciones de la OMC en la próxima cumbre ministerial de Cancún en septiembre", añadió. Según un vocero de la UE, Fischler no ve la necesidad de asumir un nuevo mandato para las negociaciones de la OMC, sin embargo señaló que explorará este tema más adelante con los países miembros de la UE.

Sociedad civil insatisfecha

Numerosas organizaciones europeas e internacionales que trabajan en temas ambientales, de desarrollo y de defensa del consumidor, expresaron una profunda insatisfacción con la decisión tomada por los ministros de agricultura de la UE debido a que, desde su punto de vista, esta no brindará ningún beneficio a los países en desarrollo.

"Estas propuestas no hacen sino confirmar nuestros peores temores", dijo Phil Bloomer, cabeza del departamento jurídico de Oxfam, Gran Bretaña. "La agricultura europea seguirá siendo subsidiada a razón de 50 billones de libras británicas, creando un amplio superávit que será descargado sobre los países pobres".

Barry Coates, director del Movimiento por el Desarrollo Mundial, señaló que el paquete de reformas "se queda corto en cuanto a lo que se requiere para frenar el dumping agrícola que destruye el sistema de subsistencia de los pequeños agricultores de los países más pobres".

La organización Consumidores Internacional, por su parte, acusó a la UE de contradecir su compromiso con los temas de desarrollo y describió este acuerdo como "anti-desarrollo, anti-comercio, y anti-consumidor".

Los productores brasileños de azúcar —país que demandó a la UE ante la OMC por las exportaciones subsidiadas de este producto—, también se fueron en contra del acuerdo debido a que el sector azucarero fue marginado en las reformas a la CAP. Eduardo Pereira de Carvalho del Sindicato de la Agroindustria de la Caña de Azúcar de Sao Paulo, anotó: "para nosotros (los productores de azúcar), este acuerdo no significa nada, no obstante este podría ser el inicio simbólico de una reforma agrícola en el seno de la UE".

Países del TLCAN adoptan estrategia de biodiversidad

En su décimo período de sesiones, el Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se realizó en Washington, Estados Unidos el 24 y 25 de junio, resolvió adoptar el "Plan estratégico de conservación de la biodiversidad para la Cooperación Norteamericana". Durante la reunión los delegados también discutieron sobre el comercio de desechos tóxicos, el manejo de químicos y agua dulce.

La CCA es una organización internacional creada por Canadá, EE.UU. y México para tratar los asuntos ambien-

tales de los tres países, especialmente en cuanto a los retos y las oportunidades ambientales derivados del libre comercio del subcontinente en el marco del TLCAN.

El proceso para la elaboración del Plan estratégico de biodiversidad contó con la colaboración de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidades indígenas, la ciudadanía y el Grupo de Trabajo para la Conservación de la Biodiversidad. El Plan es considerado un hito en la cooperación de los países del TLCAN para la protección de su medio ambiente compartido. Los objetivos del Plan son: a) promover una perspectiva continental integrada para la cooperación de la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos; b) contribuir al mantenimiento de la integridad ecológica de las eco-regiones de Norte América; y c) promover actividades para fortalecer la capacidad de la conservación de la biodiversidad y la cooperación multisectorial en los tres países para reducir y mitigar los peligros de las especies y los ecosistemas compartidos.

Sobre la gestión de los recursos hídricos, el Consejo solicitó al Secretariado que recopile y facilite el intercambio de estudios de caso sobre experiencias nacionales y locales y las prácticas en materia de calidad del agua, en particular sobre: tecnologías y técnicas de conservación, políticas de gestión hídrica y participación ciudadana para mejorar la eficiencia en el uso del agua y proteger los ecosistemas acuáticos, prácticas sustentables en cuencas hídricas de Norteamérica relacionadas con el fomento de la calidad del agua, y manejo adecuado y rastreo de residuos peligrosos.

En cuanto a este último, el manejo y movimiento transfronterizo adecuado de los residuos peligrosos fue discutido en relación a su comercio para operaciones de reciclaje y disposición final. El Consejo acordó elaborar un enfoque compatible para el manejo ambientalmente adecuado de los residuos peligrosos, incluidos proyectos piloto para el rastreo de su movimiento transfronterizo.

Sobre el manejo de sustancias químicas, el Consejo solicitó al Grupo de Trabajo de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas que analice los avances para reducir y eliminar -en la medida de lo posible- las amenazas ambientales y de salud derivadas de las sustancias químicas más tóxicas y persistentes.

La CCA también puso en marcha la Iniciativa de América del Norte sobre Adquisiciones Ambientales. En este sentido organiza una reunión de representantes de los principales programas de compras "verdes" de la región, para documentar el nivel de las adquisiciones de bienes y servicios con ventaja ambiental e identificar algunos casos exitosos.

Finalmente, el Consejo está organizando una reunión ministerial sobre comercio y medio ambiente, para lo cual solicitó al Grupo de Trabajo del Artículo 10(6) del Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte (ACAAN), que elabore un borrador de agenda para la reu-

nión y que informe al Consejo en su próxima sesión sobre su trabajo en los temas multisectoriales de preocupación en materia de comercio y medio ambiente.

Para mayor información, visite: www.cec.org

PYMES, comercio regional y desarrollo sostenible

El "Foro Internacional de Negocios: Comercio Regional y Desarrollo Sostenible en el Sector de la Pequeña y Mediana Empresa" para América Latina se realizó en Heredia, Costa Rica, del 14 al 16 de julio.

Tras fusionarse con la Fundación Alemana para el Desarrollo (DSE), la Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) es hoy InWent (Capacity Building International, Germany). Esta realiza desde 1995 Foros Internacionales de Negocios, en los que se reúnen grupos interesados de todos los continentes con el fin de promover el diálogo internacional sobre temas del desarrollo sostenible relevantes para el sector privado, con un enfoque hacia la pequeña y mediana empresa.

Durante el séptimo Foro Internacional de Negocios, que se realizó el año pasado en Johannesburgo, Sudáfrica, como evento oficial paralelo a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se analizaron los resultados logrados y los pasos pendientes diez años después de la Cumbre de Río.

InWent resolvió realizar este año tres Foros Regionales en África, América Latina y Asia, que generarán insumos para un Foro Internacional a realizarse en 2004.

El Foro para América Latina, que se realizó con el apoyo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE en Costa Rica, reunió a un grupo de 30 expertos del sector privado, instituciones de investigación y la sociedad civil para discutir los desafíos que surgen de los nuevos regímenes de comercio, poniendo particular énfasis en las perspectivas y consecuencias de la regionalización del comercio para un desarrollo sostenible del sector de la pequeña y mediana empresa (PyME).

Como temas centrales del Foro Latinoamericano se trataron: riesgos y oportunidades para el sector PyME en el contexto de la regionalización del comercio; los modelos de integración regional y sus efectos sobre el sector PyME; el papel y la competitividad de clusters enfocados en las PyMEs en el contexto de la integración regional; el fomento económico local y regional y la promoción de cadenas de valor; y experiencias prácticas y lecciones aprendidas de empresas sostenibles.

Los resultados de las discusiones se presentarán en el Foro Internacional en el 2004.

Intensificarán asistencia técnica a PMA

La OMC, el FMI, el Centro de Comercio Internacional (CCI), la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) el PNUD y el Banco Mundial anunciaron el 10 de julio de 2003 en Washington, Estados Unidos, que intensificarán las actividades al amparo del Marco Integrado para la Asistencia Técnica relacionada con el Comercio en apoyo de los países menos adelantados (Marco Integrado -MI).

"Reafirmamos nuestro compromiso de ayudar a la integración efectiva de los países menos adelantados (PMA) al sistema multilateral de comercio y la economía mundial", se señala en el comunicado.

A los esfuerzos y el compromiso de los PMA participantes en el MI, debe corresponder un resultado de las negociaciones comerciales multilaterales que sea favorable al desarrollo, continúa. "La Declaración de Doha situó el desarrollo y las necesidades e intereses de los países en desarrollo en el centro del programa de negociación. Se espera de los Miembros de la OMC que hagan realidad esos compromisos. La Quinta Conferencia Ministerial, de próxima celebración en Cancún, será un jalón importante de los progresos".

Entre los progresos realizados se informa que se han terminado o están casi terminados los estudios de diagnóstico sobre la integración comercial (EDIC)

relativos a los 13 PMA que emprendieron la fase inicial del MI. También, se indica que desde la pasada reunión de jefes ejecutivos de los organismos, han continuado creciendo las contribuciones financieras de los donantes y los organismos al Marco Integrado.

Asimismo, el 16 de julio se anunció que España contribuirá con 150.000 euros (230.000 francos suizos) a la asistencia técnica de la OMC, específicamente al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo. Con esta contribución se financiarán cuatro cursos de formación para países de América Latina que se celebrarán en el segundo semestre de 2003.

Quieren ampliar al Mercosur

La XXIV reunión cumbre del Mercosur, recién concluida en Asunción, Paraguay, estableció el consenso sobre la prioridad de avanzar en la integración regional y la coordinación macroeconómica.

A los presidentes de los cuatro países del bloque, Né-

stor Kirchner, de Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, Luis González Macchi, de Paraguay, y Jorge Batlle, de Uruguay, se sumaron los mandatarios Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia y Ricardo Lagos, de Chile, como miembros asociados.

El presidente venezolano Hugo Chávez también participó en la cumbre en calidad de invitado especial, como parte de los esfuerzos del Mercosur por alcanzar la integración con la Comunidad Andina de Naciones, a la que pertenecen asimismo Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Kirchner y Lula Da Silva, coincidieron en señalar la necesidad de ampliar el Mercosur, sumando a las naciones que integran la comunidad andina, como Perú y Venezuela. Otro país de esa comunidad, Bolivia, ya es miembro asociado del bloque.

El reconocimiento de las asimetrías de los socios menores del Mercosur (Paraguay y Uruguay) y la fijación de metas macroeconómicas comunes, como inflación, deuda pública y déficit fiscal entre otras variables, fueron las resoluciones más relevantes tras las reuniones.

Tales pautas habían sido fijadas en 2000, pero la crisis económica argentina de 2001 y los efectos de ésta en sus socios y vecinos echaron por tierra su puesta en marcha.

Como meta de deuda pública se había fijado el 40% del producto interno bruto (PIB) para 2010. Sin embargo, al leer el informe final del Consejo del Mercado Común, el canciller de Paraguay, José Antonio Moreno Ruffinelli, explicó que "varias iniciativas comenzaron a circular de manera oficiosa en torno al tema".

El propósito de sostener un déficit fiscal no mayor al 3% se plantea ahora para el año próximo, al tiempo que el de inflación anual se estableció en el 5%, a partir de 2006.

Materia pendiente

Sin embargo, la materialización de estas metas requiere que se superen constantes reclamos comerciales entre Argentina y Brasil, los socios mayores del Mercosur, siendo el del azúcar el tema más amargo en la debilitada unión aduanera.

Argentina aplica aranceles del 20% a las importaciones de azúcar brasileño, al tiempo que los agricultores argentinos acusan a Brasil de subsidiar su sector azucarero mediante el fomento a la producción de alcohol.

Por otro lado, se encuentran los reclamos de los molineros brasileños, quienes se quejan de los altos precios que deben pagar por el trigo argentino, debido a los gravámenes del 10,5% a importaciones del cereal procedentes de fuera del bloque, mientras que el producto no tiene aranceles dentro del Mercosur.

Otras diferencias se refieren al ingreso de productos transgénicos argentinos a Brasil, país que exige el etiquetado, y los subsidios y las políticas brasileñas de radicación de inversiones.

Los mandatarios subrayaron la voluntad política de

avanzar en la consolidación del bloque y en lograr otros puntos, como la unificación de políticas sociales y el establecimiento de un Parlamento del Mercosur.

Otro aspecto destacado fue la firma de un acuerdo marco con India. Las ventas de ese país al Mercosur ascendieron en 2001 a US\$710 millones, en tanto que las exportaciones del bloque sumaron US\$728 millones.

Paraguay, por su parte, mantuvo una reunión bilateral con Venezuela en la que se ratificó un compromiso firmado en 2000 para la provisión de combustible venezolano.

En el encuentro de mandatarios, Uruguay asumió la presidencia del bloque por el próximo semestre.

Forman Grupo G3

En otro orden de cosas, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Chile tuvo impacto inmediato en el Mercosur y Brasil ya replicó a lo que considera una jugada estratégica de EE.UU. para condicionar las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) al modelo del pacto chileno-estadounidense.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva y su canciller Celso Amorim, consideran que las discusiones en el ALCA se han vuelto ociosas y deben pasar ahora a una instancia superior: la Organización Mundial del Comercio. En función de esa nueva línea de política externa, Lula y Amorim anunciaron la constitución del G3: un grupo constituido por Brasil, India y África del Sur. A ese núcleo se sumarán dentro de unos días China y Rusia. La función de este flamante bloque es disputar las políticas comerciales proteccionistas de las potencias mundiales con las mismas

Perú se pronuncia sobre patentes de Maca

La Delegación del Perú presentó una Declaración sobre las patentes de maca ante la OMPI durante la Quinta sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, que tuvo lugar del 7 al 15 de julio del 2003 en Ginebra, Suiza.

El documento intenta demostrar cómo se materializa la biopiratería aprovechando ciertas debilidades que presenta la aplicación del sistema de patentes, desde una perspectiva absolutamente técnica.

Para ello tomaron el caso de las patentes de extracto de raíces de *Lepidium*

meyenii para aplicaciones en farmacia y tratamiento de la disfunción sexual con un extracto de raíces de *Lepidium meyenii*, y de la solicitud composiciones y métodos para su preparación del *Lepidium*.

El *Lepidium meyenii* o maca es una planta nativa de la sierra central del Perú, donde se le cultiva desde hace siglos. Los efectos de la maca sobre la fertilidad son conocidos desde el siglo XVI. También se le ha atribuido la calidad de afrodisíaco, y ha sido utilizado para curar la frigidez en mujeres y la impotencia en hombres. Más recientemente, se le han atribuido efectos anticancerígenos.

El documento completo en PDF se encuentra en

http://www.wipo.int/documents/es/meetings/2003/igc/pdf/grtkf_ic_5_13.pdf

armas que aplican contra los países emergentes. Y la batalla será en la OMC.

El gobierno brasileño sabía, de antemano, que el acuerdo con Chile pretendía ser usado por EE.UU. como un modelo para el ALCA. Pero el esquema chileno, tal vez válido para ese país de economía abierta, no se adapta ni a la Argentina ni a Brasil.

Tiene dos grandes defectos: posterga decisiones sobre las trabas de acceso al mercado estadounidense (es el caso de las medidas antidumping) y aplaza la eliminación de subsidios a los bienes agrícolas.

(Elaborado por la redacción con base en información de Agencia IPS y del diario Clarín).

Tropiezos en la disputa del algodón

Los Estados Unidos continúa bloqueando procedimientos en la disputa legal que mantiene con Brasil, país que lo acusa de subsidiar ilegalmente el algodón. El grupo especial que tramita la disputa aceptó la posición de EE.UU., según la cual "el Brasil puede iniciar cualquier demanda en contra de subsidios excepto en aquellos casos que están amparados por la 'Cláusula de Paz' adoptada en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, incluso antes de examinar uno de los reclamos presentados por Brasil por violaciones del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias".

La Cláusula se refiere al artículo 13 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC que confiere inmunidad a la mayoría de los subsidios de las demandas basadas en el GATT y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, hasta el 31 de diciembre del 2003.

Brasil no alega en contra de los subsidios cobijados bajo la Cláusula de Paz; pero asegura que los subsidios al algodón de EE.UU. sobrepasan actualmente los límites permitidos por ella.

El reclamo del Brasil sostiene que EE.UU. no tiene argumentos para defenderse bajo el artículo 13, porque las medidas de ayuda interna mencionadas por el Brasil fomentan la producción del algodón de los años 1999-2001 sobrepasando el subsidio establecido por EE.UU. para el año de 1992. Además, Brasil sostiene que los subsidios a la exportación "no coinciden plenamente con las provisiones del capítulo V del Acuerdo sobre Agricultura".

En lugar de responder a estos alegatos, EE.UU. ha pedido al grupo especial "que observen cómo las medidas establecidas en la Cláusula de Paz son inmunes a cualquier acción legal, incluyendo las incluidas en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, basado en las reglas del Acuerdo sobre Subvenciones y el GATT 1994".

Critican retraso

EE.UU. va incluso más lejos y sostiene que la frase "inmunes de acciones" significa 'inter alia', es decir "no expuestas a un proceso legal o demanda". Según este argumento, Brasil no puede seguir ninguna demanda en contra de un subsidio incluido en la Cláusula de Paz, como es el caso de fomento al algodón.

El escrito de EE.UU. citado más arriba no proporciona ninguna evidencia que pruebe que los subsidios en cuestión efectivamente están amparados por la Cláusula de Paz. En la reunión del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), Brasil se quejó de las negativas de EE.UU. a entregar información sobre sus programas de ayuda a la agricultura, lo que permitiría al grupo especial determinar si es que concuerdan con las condiciones establecidas en la Cláusula.

Para superar esta desventaja, Brasil pidió al OSD que nombre un facilitador que ayude a recopilar la información sobre los subsidios al algodón que, de acuerdo con las predicciones del Comité Consultor Internacional del Algodón alcanzarían los \$3.7 billones este año. EE.UU. se negó a este pedido e insistió en que los subsidios al algodón están dentro de la Cláusula de Paz.

Brasil sostiene que recibir por separado audiencias y documentos sobre la Cláusula de Paz, antes de examinar los reclamos sustanciales, representa un retraso significativo en la resolución de las demandas y muchos recursos financieros.

Continúa guerra del azúcar

El ministro brasileño de Agricultura anunció a inicios de julio que Brasil, Austria y Tailandia solicitarían un panel en la sesión del 21 de julio del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), para tratar los casos que ellos iniciaron en contra de los subsidios a la producción de azúcar de la Unión Europea (UE).

Los demandantes sostienen que los subsidios de la UE a las 1.6 toneladas anuales de azúcar (de la categoría C) distorsionan los precios internacionales, lo que causa al Brasil una pérdida estimada de \$900 millones. Brasil y Australia iniciaron un proceso en septiembre del 2002 mientras que Tailandia llenó su formulario de consulta en marzo del 2003.

Tailandia sostiene que la política azucarera de la UE permite los subsidios a la exportación, por encima de los compromisos especificados en la Sección II de la Parte IV de la Lista de Concesiones. Tailandia ha argumentado que el azúcar producido por fuera de las cuotas "A" y "B" -es decir la "C"- no puede ser vendido internacionalmente el año en que fue producida, sino que tiene que ser exportada o completar la cuota de producción del año siguiente. "Por culpa del régimen azucarero de la UE, los exportadores de la azúcar C pueden exportarla a precios inferiores a sus costos de producción", dice el documento presentado por Tailandia.

Buena acogida a pedido africano en Cancún

Por otro lado, la iniciativa sobre el algodón lanzada por los países africanos de Benin, Burkina Faso, Mali y el Chad, ha sido bastante bien recibida en el seno de la OMC, aunque las discusiones oficiales sobre el tema aún no se han realizado.

Estos cuatro países pidieron a la Conferencia Ministerial de Cancún que se acuerde una rápida eliminación de todos los subsidios a la producción y a la exportación de algodón, y que se financie una compensación a los productores de algodón de los países menos desarrollados para, de alguna forma, retribuir los

ingresos perdidos durante todo el tiempo en que se mantuvieron los subsidios.

Estados Unidos calificó el pedido como "perfectamente válido"; pero sugirió que el problema del algodón debe ser dilucidado mejor a través de la eliminación de todos los subsidios a los productos agrícolas.

Muchos países, entre ellos, Brasil, Canadá, Cuba, Indonesia y las Filipinas, apoyaron la iniciativa pero ningún país ha comentado aún específicamente la propuesta de compensar a los campesinos de los países menos desarrollados hasta que la eliminación sea completada.

Plantean futuro del Protocolo de Kyoto

El décimo octavo período de sesiones de los órganos subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos (CMNUCC) se realizó del 4 al 13 de junio en Bonn, Alemania. La reunión se enfocó principalmente en el proceso de preparación para la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, y se discutió sobre el papel de las actividades forestales bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). También se abordaron temas sobre la capacitación de los países en vías de desarrollo, el Fondo Especial de Cambio Climático, las políticas y medidas para tratar el tema, y la próxima evaluación global de esta materia.

Uno de los asuntos clave de las discusiones fue si Rusia ratificaría el Protocolo de Kyoto, ya que esto determinaría el futuro del proceso. Para que el Protocolo entre en vigencia, tienen que ratificarlo 55 Partes. Además de este requisito, el Protocolo debe ser ratificado por un número mínimo de países industrializados que juntos correspondan a, por lo menos, el 55% de las emisiones de dióxido de carbono emitidas por este grupo en 1990 (año de referencia tomado por el Protocolo). El Protocolo ha sido ratificado hasta la fecha por 111 países, incluyendo a 32 países industrializados que representan el 44 por ciento de las emisiones de 1990. Solo con la ratificación de Rusia el Protocolo entraría en vigencia. EE.UU., el país que emite más gases de efecto invernadero en el mundo, rechazó el Protocolo y decidió aplicar sus propias medidas nacionales.

La Unión Europea (UE) y otros países desarrollados que ratificaron el Protocolo, han presionado a Rusia para que ratifique. Este país hizo declaraciones en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en septiembre de 2002, que confirmaban su intención de ratificar. En procesos más recientes, como la Cumbre del G-8 en Evian, Francia, en junio de 2003, los delegados rusos expresaron que su país no espera que la ratificación sea un problema.

En la reunión de Bonn, la Secretaria Ejecutiva del CMNUCC, Joke Waller-Hunter, expresó que creía que Rusia posiblemente presentaría su instrumento de ratificación en la Tercera Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, que se realizará este septiembre en Moscú. Además, anotó que, si la ratificación llegara el 13 de septiembre, el Protocolo entraría en vigencia a tiempo para la próxima reunión de la Conferencia de las Partes del CMNUCC a realizarse en Italia este diciembre. Rusia podría beneficiarse económicamente de manera significativa a través del comercio de emisiones dentro del marco del Protocolo.

Trabajo futuro bajo el Protocolo

Durante la reunión, EE.UU. (como Parte del CMNUCC pero no del Protocolo) envió señales preocupantes para al-

gunos observadores pues propuso que se planteara un presupuesto separado para las actividades de la Secretaría bajo el Convenio y el Protocolo, y presionó para que se realicen reuniones separadas de la Conferencia de las Partes del CMNUCC y de las Partes del Protocolo. Esta reorganización del trabajo podría sentar un precedente para otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA).

Los que se opusieron a esta propuesta, argumentaron que podría "crear una clara separación entre dos instrumentos legales que son complementarios", y que tendría un impacto negativo sobre el trabajo de la Secretaría.

La Secretaría del CMNUCC presentó proyecciones de las emisiones de los países desarrollados hasta el 2010. Mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados se estabilizaron durante los 90, se espera que las emisiones de los países altamente industrializados aumenten en un 17% entre 2000 y 2010.

Asimismo, se espera que las emisiones de las economías en transición, que declinaron significativamente durante los 90, también aumenten. La Secretaría Ejecutiva del CMNUCC dijo que "estos hallazgos demuestran claramente que se necesitarán políticas más fuertes y creativas para acelerar la diseminación de tecnologías amigables con el clima y la persuasión a las empresas, los gobiernos locales y los ciudadanos para que disminuyan sus emisiones de gases de efecto invernadero."

La información surge de la Compilación y Síntesis del CMNUCC de la Tercera Comunicación Nacional de las Partes, que también delinea el creciente número de medidas que están adoptando los países para el tratamiento del cambio climático. La novena Conferencia de las Partes del CMNUCC y la décimo novena sesión de los órganos subsidiarios se realizarán en Milán, Italia, en diciembre de 2003.

Para mayor información, visite: <http://unfccc.int/>

Entrará en vigencia protocolo de bioseguridad

El Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, que forma parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), entrará en vigencia el 11 de septiembre del 2003, después que Palau fuera el Estado número 50 en ratificarlo el 13 de junio pasado.

El objetivo del Protocolo es controlar el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados (OVMs) y los efectos negativos que puede causar su descarga al ambiente, particularmente sobre los ecosistemas y la salud humana.

El Protocolo, que ha sido considerado por varios como la primera operacionalización del principio precautorio, establece un procedimiento de un acuerdo previo informado (API) para la importación de OVMs. El Protocolo también tiene im-

plicaciones comerciales porque permite a los países Partes del mismo rechazar cargamentos de OVMs sobre la base de la precaución. Los Miembros de la OMC están en proceso de negociar la relación entre las obligaciones comerciales específicas en los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMUMA) y las reglas de la OMC. Mientras que algunos Miembros de la OMC, como la Unión Europea, serán Partes del Protocolo, EE.UU., que no ha ratificado el CDB, no lo será.

Avances en regulación de transgénicos

El 2 de julio el Parlamento Europeo adoptó dos propuestas de la Comisión sobre etiquetado y trazabilidad de alimentos genéticamente modificados (GMs). Específicamente, aprobaron los porcentajes de umbral (requerimientos mínimos para etiquetado) adoptados por los Ministerios del Ambiente y Agricultura a finales del 2002: un umbral de 0.9%, que exime de requerimientos de etiquetado a los productos GMs por debajo de ese valor, y 0.5% por la presencia accidental de organismos genéticamente modificados (OGMs) no autorizados y evaluados como no-riesgosos. También enmendaron el borrador de regulaciones que permitirían a los estados miembros de la Unión Europea (UE) a imponer "medidas apropiadas" para prevenir la presencia no intencional de OGMs en otros productos.

Grupos de la sociedad civil que han mantenido campañas extensas para la aplicación de medidas estrictas que prevengan la contaminación, consideraron que la enmienda fue un paso importante, e hicieron un llamado para que estas medidas sean obligatorias. La organización Amigos de la Tierra, por su parte, criticó el umbral del 0.9%, argumentando que es muy alto y solicitó que se elaboren regulaciones de responsabilidad más estrictas.

Grupos de granjas estadounidenses criticaron fuertemente la decisión del Parlamento, pues temen que ésta creará una barrera más grande al comercio que la moratoria de facto actual sobre las aprobaciones de los OGMs, la cual está impugnando actualmente EE.UU. y otros países en la OMC. El Buró Americano de Granjas dijo que "con este requerimiento nuevo de etiquetado y rastreabilidad, la UE ha convertido una mala situación en una peor". El grupo exhortó a la Administración de EE.UU. a que continúe agresivamente con la impugnación del caso en la OMC.

El Consejo Europeo de Ministros deberá aprobar el voto del Parlamento a finales de julio, para que entre en vigencia en septiembre, estipulando un período de seis meses para su cumplimiento. Mientras que la Comisión Europea ha señalado en varias ocasiones que retirará la moratoria de facto cuando entren en vigencia las regulaciones de

etiquetado y rastreabilidad, no queda claro si EE.UU. y otros países abandonarían la impugnación en la OMC, aún si se retomaran las aprobaciones de los OGMs.

Comisión del Códex adopta estándares

La Comisión del Códex Alimentarius -órgano encargado de desarrollar estándares internacionales relacionados con la seguridad alimentaria- se reunió del 30 de junio al 7 de julio en Roma, Italia, donde aprobó tres estándares sobre análisis de riesgo para alimentos producto de la biotecnología. El Grupo Intergubernamental de Trabajo Ad Hoc de Derivados Alimenticios de Biotecnología remitió los estándares en marzo de 2003.

Estos incluyen referencias al "rastreo de productos" y al etiquetado de alimentos como herramientas de manejo. Varios observadores creen que el acuerdo logrado en la reunión del Códex podría significar un avance muy importante en las negociaciones internacionales sobre el uso de sistemas de "rastrearabilidad", y parcialmente reivindicantes de la posición de la UE de introducir un sistema de etiquetado y rastreabilidad para alimentos GM, propuesta criticada varias veces por EE.UU., Canadá, Argentina y otros en el marco de la OMC.

Esta percepción del estándar del Códex asume que el "rastreo de productos" y la "rastrearabilidad" son la misma cosa. Sin embargo, EE.UU. -apoyado por la industria alimenticia- ha insistido en que ambos términos no son equivalentes, argumentando que el "rastreo de productos" es limitado a "un paso adelante y un paso atrás". Hasta la fecha, no hay una definición acordada del Códex para estos términos.

Por otro lado, los grupos de consumidores acogieron la adopción de las guías del Códex. El Director General de Consumidores Internacional (que agrupa a más de 250 organizaciones en 110 países), Julian Edwards, dijo que "estos estándares son una victoria importante para los consumidores, la ciencia, la buena regulación y el sentido común".

EE.UU. continúa empujando la biotecnología

El Departamento de Agricultura de EE.UU. organizó una conferencia ministerial sobre ciencia y tecnología agrícola en Sacramento, California, del 23 al 25 de junio de 2003. Participaron los Ministros de 75 países, en su mayoría países en vías de desarrollo.

En un evento del sector industrial, que se realizó de forma paralela en Washington D.C., el Presidente estadounidense, George W. Bush, habló sobre la biotecnología y declaró que "varios gobiernos europeos han bloqueado la im-

portación de nuevos cultivos biotecnológicos, actuando bajo miedos sin fundamentos y no científicos". Sobre el hambre en África, solicitó a Europa que acepten alimentos genéticamente modificados y dijo que "se debe incentivar la diseminación segura y efectiva de la biotecnología para ganar la pelea contra la hambruna mundial".

Sin embargo, los críticos se unieron para protestar en el marco de estos eventos, notando el vínculo entre la Administración de Bush y las grandes empresas agrícolas que se lucran de los cultivos GMs. Asimismo, argumentaron que hay suficiente comida para alimentar al mundo, y que más bien el problema radica en la distribución justa. Walter Kessler de los Defensores de Granjas Familiares dijo que las familias granjeras han sufrido pérdidas por los productos GM y "...que la verdad está siendo sepultada en la campaña multimillonaria de relaciones públicas pagada por la industria biotecnológica y promovida por el Departamento de Agricultura, principales auspiciantes de la conferencia".

La biotecnología también fue ojo de un debate intenso el 25 de junio en una Cumbre entre EE.UU. y la UE, que se realizó en Washington D.C. Los representantes estadounidenses reiteraron su frustración porque la UE no levantó su moratoria de facto a las importaciones de OGMs. Esto incitó a la administración estadounidense a entablar el pasado 13 de mayo procedimientos legales contra la UE en el marco de la OMC.

Robert Zoellick, Representante Comercial de EE.UU. dijo que "la moratoria de la UE es ilegal, niega el acceso a los mercados europeos a productos biotecnológicos saludables y nutritivos provenientes de EE.UU., y niega opciones a los consumidores europeos".

Funcionarios europeos mencionaron las diferencias en la mentalidad, percepción y actitudes entre los consumidores europeos y estadounidenses frente a los productos alimenticios que son resultado de la bioingeniería.

Reunión sobre contaminantes orgánicos

Una reunión sobre la aplicación de un convenio para reducir la descarga de químicos contaminantes al medio ambiente, se llevó a cabo recientemente en Ginebra, Suiza.

El séptimo período de Sesiones del Comité Intergubernamental de Negociaciones (INC-7, por sus siglas en inglés) sobre un instrumento internacional y jurídicamente vinculante para aplicar acciones internacionales sobre ciertos Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), se realizó del 14 al 18 de julio de 2003.

Esta reunión posiblemente será la última en forma del Comité Intergubernamental de Negociaciones, antes que entre en vigencia el Convenio de Estocolmo, a principios del 2004.

El objetivo del Convenio es proteger la salud humana y el ambiente de COPs, químicos que permanecen intactos en el ambiente por largos períodos, se dispersan de manera amplia geográficamente, se acumulan en la capa de grasa de los organismos vivos y son tóxicos para los humanos y la fauna silvestre. En la aplicación del Convenio, los gobiernos tomarían medidas para eliminar o reducir la descarga de estos contaminantes al ambiente.

En 1997 el Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) invitó a que se formara el INC para que elaborara el instrumento jurídico sobre COPs. El INC y sus órganos subsidiarios terminaron su trabajo en diciembre de 2000 sobre el instrumento -el Convenio de Estocolmo-, y en mayo de 2001 la Conferencia de Plenipotenciarios lo adoptó.

Tópicos de la reunión

En la reunión se presentaron algunos avances significativos en las discusiones, en cuanto a definir las bases para una administración exitosa del Convenio, a pesar de que los temas más difíciles fueron relegados para la Conferencia de las Partes.

El Convenio entrará en vigencia 90 días después de que se presente la quincuagésima ratificación por parte de un gobierno, y al momento cuenta con 33 ratificaciones.

Durante la semana, los delegados se enfocaron en asuntos relacionados con la preparación de la primera Conferencia de las Partes, incluyendo el desarrollo de reglas de procedimiento y financiamiento y la clarificación de reglas para la solución de diferencias. La reunión de INC-7 también ofreció la oportunidad para que los delegados consideraran algunos de los temas más complejos que se tendrán que abordar una vez que el Convenio de Estocolmo entre en vigencia. Entre estos temas figuran el mecanismo financiero, los términos de referencia para el Comité de Revisión de los COPs, y el no cumplimiento.

Para apoyar la implementación rápida del Convenio, el GEF y el PNUMA organizaron una serie de talleres sub-regionales de septiembre de 2001 a abril de 2003 en Asia, África, Medio Oriente, Europa del Este, América Latina y el Caribe. El objetivo principal de los talleres fue el familiarizar a los oficiales de los gobiernos con el Convenio, sus beneficios y las fuentes de apoyo para su aplicación, con el fin de que sus países ratifiquen el Convenio y tomen medidas tempranas respecto de los COPs.

Fuente: Linkages Update IISD (26 de Julio 2003). Para mayor información, visite: <http://www.pops.int/>

EVENTOS Y PUBLICACIONES

EVENTOS

5-7 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

XVIII Sesión del Foro Global de Biodiversidad en conjunción con la V Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

gbf@uicn.org, www.gbf.ch

7-14 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

Semana de Acción Global. Mexico Solidarity, msn@mexicosolidarity.org, www.mexicosolidarity.org/Cancun_WTO.html

8-9 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

Foro internacional: Derechos de las mujeres en los tratados comerciales. Mujeres Hacia Cancún, mujereshaciacancun@yahoo.com.mx, Mujer Diálogo, mujerdialogo@prodigy.net.mx

9 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

Simpósio de la FAO sobre Agricultura, reformas comerciales y seguridad alimentaria. Hotel Sierra Hotel

9 y 12 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

Sesión Parlamentaria Paralela a la Conferencia Ministerial de la OMC Unión Parlamentaria Internacional

10 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

Sesión inaugural Foro Heinrich Boell Foundation: La OMC y el medio ambiente. Hotel Best Western Hotel, Plaza Caribe, Tulum 13, www.cancun2003.org/

10-12 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

Feria Internacional Expo Comercio y Simposio: Celebrando y Expandiendo la Economía Ética y Sustentable durante la Reunión Ministerial de la OMC. Instituto para la Agricultura y Política Comercial y Comercio Justo, México (IATP) www.iatp.org

10-14 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

V Conferencia Ministerial de la OMC, www.wto.org

11 SETIEMBRE, CANCÚN, MÉXICO

Simpósio sobre "Maíz, Biotecnología y Comercio", Consumer's Choice Council

16-24 SETIEMBRE, PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO

Sesión de Capacitación Intensiva para Negociadores de Acuerdos Internacionales de Inversión para el Caribe, Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo (UNCTAD) / OMC, iia@unctad.org

18-20 SETIEMBRE, COLOMBIA

III Simposio Nacional de Agroecología, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira; vic-tabor@telesat.com.co

22 SETIEMBRE, MONTEVIDEO, URUGUAY

Fecha límite para la recepción de propuestas para el Programa de Pequeños Fondos Competitivos para Investigación. Convocan Secretariado de Manejo del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe (SEMA), y el International Development Research Centre (IDRC), Uruguay. Para apoyar proyectos de investigación dirigidos al estudio de mecanismos de asociación multisectorial para la gestión sustentable del agua en las ciudades de América Latina y el Caribe. La convocatoria

está abierta a Municipalidades de América Latina y Caribe. SEMA, Avda. Brasil 2655 - 113000, Montevideo, Uruguay. info@ems-sema.org

22-24 SETIEMBRE, GINEBRA, SUIZA

Órgano de Supervisión de los Textiles de la OMC, www.wto.org

22-26 SETIEMBRE, BULGARIA

Desarrollo de Planes Nacionales de Implementación del Manejo de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en 12 países piloto, financiado por el GEF. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), División de Tecnología, Industria y Economía (DTIE), Sustancias Químicas, pops@unep.ch, www.chem.unep.ch/pops

29 SETIEMBRE, GINEBRA, SUIZA

Órgano de Examen de las Políticas de Comercio de la OMC - Honduras www.wto.org

29 SEPTIEMBRE-3 OCTUBRE, MOSCÚ, RUSIA

Conferencia Mundial sobre Cambio Climático. International Trade Center, Krasnopresnenskaya Naberezhnaya 12, Moscú, wccc2003@hydromet.ru, www.wccc2003.org

1 OCTUBRE, GINEBRA, SUIZA

Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC - Honduras, www.wto.org

6-17 OCTUBRE, LIMA, PERU

Sesión de Capacitación Intensiva para Negociadores de Acuerdos Internacionales de Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo (UNCTAD) / OMC, iia@unctad.org

20-21 OCTUBRE, TOKYO, JAPÓN

Mesa Redonda Global, Anual sobre Finanzas y Medio Ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), División de Tecnología, Industria y Economía (DTIE), Rama de Economía y Comercio, Unidad de Iniciativas Financieras. fi@unep.ch, www.unepfi.net

20-22 OCTUBRE, GINEBRA, SUIZA

Órgano de Supervisión de los Textiles de la OMC, Comité de Salvaguardias de la OMC, www.wto.org

20-24 OCTUBRE, GINEBRA, SUIZA

Segunda Sesión del Grupo de Trabajo de composición abierta del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. sbc@unep.ch, www.basel.int

PUBLICACIONES

BLANCO, Herminio y Jaime Zabludovsky. 2003.

"Alcances y límites de la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas". Documento de Trabajo - IECI-01 de la Iniciativa Especial de Comercio e Integración del Banco Interamericano de Desarrollo. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), la División de Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos (ITD), y la Unidad de Estadística y Análisis Cuantitativo (STA) del Departamento de Integración y Programas Regionales, Buenos Aires y Washington DC. El documento está disponible en:

http://www.iadb.org/intal/publicaciones/Blanco-Zabludovsky_DT-IECI-01.pdf

COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL DE AMÉRICA DEL NORTE (CCA). 2003.

"Derecho y Políticas Ambientales en América del Norte", Volumen 10: Acceso público a la información ambiental. El Principio de precaución. CCA, Montreal.

COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2003.

"Fortalecimiento de la Unión Aduanera en los Países de la Comunidad Andina". El documento está disponible en: <http://www.comunidadandina.org/debates.htm>

CONSEJO DE LOS ADPIC de la OMC. 2003.

"The Relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge". Presentación de Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, India, Perú, Tailandia y Venezuela. Documento disponible en: www.comunidadandina.org/development/2_David%20Vivas.pdf

IZKO, Xavier y Diego Burneo. 2003. "Herramientas para la Valoración y el Manejo Forestal Sostenible de los Bosques Sudamericanos". Programa de Conservación de Bosques de UICN-Sur, Quito.

KÖNZ, Peider; Christophe Bellmann, Lucas Assunciao y Ricardo Melendez-Ortiz. 2002. "Trade, Environment and Sustainable Development Views from Sub-Saharan Africa and Latin America: A Reader". UNU/IAS y ICTSD, Ginebra.

PNUMA. 2002. "Capacity Building for Sustainable Development: An Overview of UNEP Environmental Capacity Development Initiatives". El documento está disponible en: www.unep.org/Pdf/Capacity_building.pdf

SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2003.

"Cómo Hacer Negocios en la Comunidad Andina: Guía de Comercio e Inversión". Segunda edición, Lima. Preparado con el auspicio de la CAF y la CAN. Para mayor información: www.comunidadandina.org/debates.htm

SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2002.

"CD-Rom: Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino". Libro electrónico gratuito, disponible en www.comunidadandina.org/public/libro_18.htm

TACCONE, Juan José y Uziel Nogueira (editores). 2003.

"Informe MERCOSUR" Número 8, Período 2001- 2002. Serie INTAL de Informes Subregionales de Integración, preparado por Ricardo Rozemberg y Gustavo Svarzman. BID/INTAL, Buenos Aires. Documento disponible en: http://www.iadb.org/intal/publicaciones/informes_subregionales.htm

UNCTAD. 2003.

"Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities". Documento preparado en el marco de las negociaciones del GATS. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra.

VITALIS, Vangelis. 2002. "Private Voluntary Eco-labels: Discriminatory and Environmentally Disappointing". OCDE, París.

PUENTES

Entre el Comercio y el Desarrollo Sostenible

Vol. IV, No. 2, Julio-Setiembre 2003

PUENTES, la versión para América Latina de la publicación BRIDGES, busca proveer información y análisis sobre la intersección entre el comercio y el desarrollo sostenible para el creciente número de actores de todo el mundo involucrados en el debate.

PUENTES es publicado trimestralmente por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional, Costa Rica; en conjunto con la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y el Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible (ICTSD por sus siglas en inglés).

Consejo institucional Yolanda Kakabadse
Ricardo Meléndez-Ortiz
Carlos Murillo

Comité editorial Christophe Bellmann
Eduardo Escobedo
Marijke Hallo
Carlos Pomareda

CINPE

Editora Fabiola Pomareda
Asistente administración Hannia Corrales
Tel. (506) 263-4550
Fax. (506) 263-4540
Apdo. Postal 555-3000 Heredia, Costa Rica
E-mail puentes@cinpe.una.ac.cr
Web www.cinpe.una.ac.cr

FFLA

Coordinadora de noticias Marijke Hallo de Wolf
Editora de noticias Manuela Botero
Asistente de noticias Fernanda Meneses
Tel/Fax (593-2) 246-5915 / 292-0635
Casilla Postal 17-17-558, Quito, Ecuador
E-mail ffla@ffla.net
Web www.ffla.net

ICTSD

Coordinador Eduardo Escobedo
Tel. (41 22) 917 84 92
Fax (41 22) 917 80 93
Dirección International Environment House
Chemin des Anémones 11-13
1219 Châtelaine (Ginebra) Suiza
E-mail puentes@ictsd.ch
Web www.ictsd.org

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en PUENTES son exclusivas de los/as autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de las instituciones que apoyan la publicación. La opinión de los/as autores es independiente de las instituciones que éstos representan. El material puede reproducirse, con una completa cita de su fuente.